

MARZO 21 DE 1935

79.^a REUNION — 16.^a SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor CARLOS A. BRUCHMANN,

Vicepresidente provisorio del Senado

y del doctor RAMON S. CASTILLO

Presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales

Ministro presente: de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Bravo, Carlos A. Bruchmann, Rudecindo S. Campos, Ramón S. Castillo, Raúl Ceballos Reyes, Laureano Landaburu, Lucio López Peña, Juan José Luby, José Nicolás Matienzo, Pío Montenegro, Alfredo L. Palacios, Carlos R. Porto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Lisandro de la Torre, Horacio Vera Ocampo, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

Senadores ausentes, con aviso: Mario Arenas, Aldo Cantoni, Atanasio Eguiguren, Francisco R. Galíndez, Eduardo Laurencena, Robustiano Patrón Costas, Carlos Serrey.

Senador ausente, sin aviso: Mariano P. Ceballos.

SUMARIO

1.—Homenaje a la memoria del ex senador doctor Francisco E. Correa.

2.—Acta.

3.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre intervención a la provincia de La Rioja.

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo, dando cuenta y remitiendo copia legalizada de los decretos de fecha 7 y 14 de Febrero, relacionados con la intervención en la provincia de Buenos Aires.

III.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar magistrados judiciales.

IV.—Mensaje del Poder Ejecutivo, dando cuenta de las medidas de urgencia adoptadas en presencia de los hechos producidos el 13 del corriente en la provincia de Buenos Aires.

V.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre renovación parcial del plantel flotante al servicio de la Dirección General de Navegación y Puertos.

VI.—Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

4.—Moción del senador Arancibia Rodríguez para que se traten sobre tablas los proyectos de ley

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

—en segunda revisión, sobre bancos y moneda. Se aprueba.

5.—Asuntos entrados:

VII.—Proyectos de ley en revisión.

6.—Moción del senador Arancibia Rodríguez, para que se trate sobre tablas el proyecto de ley en segunda revisión, sobre régimen legal del petróleo. Se aprueba.

7.—Asuntos entrados:

VIII.—Telegrama del senador Cantoni, denunciando procedimientos abusivos de la policía de la provincia de San Juan.

IX.—Notas del ex senador Cruz Vera, comunicando que ha tomado posesión del cargo de vicegobernador de la provincia de Mendoza.

X.—Comunicación oficial.

XI.—Peticiones particulares.

8.—Proyecto de resolución, del senador Sánchez Sorondo, invitando al ministro del Interior a concurrir al Senado para informar sobre los motivos que han determinado al Poder Ejecutivo a intervenir en la provincia de Buenos Aires. Se rechaza.

9.—Proyecto de ley del senador Matienzo, sobre intervención en la provincia de Buenos Aires.

10.—Manifestaciones del senador de la Torre, con motivo de una publicación del Ministerio de Agricultura sobre la calidad de las carnes elaboradas por los frigoríficos de Gualaguaychú y Grondona y Compañía.

11.—Moción del senador Campos para que se considere sobre tablas el proyecto de ley en revisión, sobre las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo al artículo 5º de la ley 12.140. Se aprueba.

12.—Consideración de los proyectos de ley en segunda revisión, sobre bancos y moneda. Se aprueban, quedando convertidos en ley.

13.—Moción del senador Sánchez Sorondo, para que se autorice a la Presidencia a comunicar al gobierno de la provincia de Mendoza, la vacante de senador por dicha provincia. Se aprueba.

14.—Consideración del asunto a que se refiere el número 6 de este sumario. Se aprueba, quedando convertido en ley.

15.—Moción del senador Santamarina, para que se autorice a la Presidencia a comunicar las sanciones producidas por la Cámara en la sesión de la fecha. Se aprueba.

16.—Consideración del asunto a que alude el número 11 de este sumario. Se aprueba.

—En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de Marzo de 1935, siendo la hora 16, dice el:

1

HOMENAJE

Sr. Presidente (Bruchmann).—Queda abierta la sesión.

—Poniéndose de pie:

Señores senadores:

Después de la muerte del senador, doctor Francisco Correa, es ésta la primera reunión que realiza esta Cámara que él honró con su personalidad de hombre público culto y austero.

Representó varias veces a su provincia natal, Santa Fe, en la Cámara de Diputados, dejando en su larga actuación el recuerdo perdurable de una fecunda labor parlamentaria.

Llegado al Senado con la justa consagración de legislador eficaz, las legítimas esperanzas cifradas en su acción fueron colmadas por una tarea incesante que hubiera prestigiado la vida de los parlamentos más cultos.

Obligado al ritual de la síntesis de su personalidad, diré que algunas de sus piezas oratorias, modelos en su género, exaltarán el acervo de las Cámaras legislativas argentinas como expresión de cultura superior, energía moral y, sobre todo, por la clara e inmediata visión que, ante las más difíciles cuestiones, percibía su intensa y rara penetración mental.

Invito a los señores senadores, como homenaje a la memoria del señor senador extinto, a ponerse de pie.

—Así lo hacen los señores senadores y el público de las galerías.

2

ACTA

Sr. Presidente (Bruchmann). — Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. Porto. — Pido la palabra.

Solicito que se suprima la lectura y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Habiendo asentimiento, así se procederá.

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

dual de las profundidades de las rutas navegables, con trabajos de dragado que representan hoy la extracción insuficiente de unos 25.000.000 de metros cúbicos anuales y el balizamiento de esas vías se atienden con un plantel deficiente por su excesiva antigüedad, por cuya causa los rendimientos están lejos de alcanzar los índices mínimos de explotación y economía. El desgaste de ese plantel, en un largo período de tiempo determina anualmente cifras de inversión cada vez mayores, por las reparaciones constantes que requieren y su conservación, cada vez más precaria, ha elegido durante la última década, alrededor de 3.000.000 de pesos por año, es decir, un 40 % del total de gastos pertinentes al renglón «dragado y balizamiento de los ríos». A esta consecuencia, únese, además, la de los mayores costos medios resultantes de las condiciones de eficiencia relativa del plantel, por no responder, en gran parte, a las aplicaciones de la técnicas moderna.

El plan de renovación cuya autorización se recaba de vuestra honorabilidad, importa una inversión máxima de 20.500.000 pesos a distribuirse, en su forma de pago, en cuotas anuales no mayores de 4.000.000 de pesos, cuya casi totalidad se financiará con recursos del crédito.

Impuesto el Poder Ejecutivo de la necesidad ineludible de acometer la realización de ese plan, se permite solicitar de vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que deja fundamentado.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

AGUSTÍN P. JUSTO.

Manuel R. Alvarado.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo a renovar parcialmente o incrementar el plantel flotante — tren de dragado y embarcaciones auxiliares — al servicio de la Dirección General de Navegación y Puertos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, mediante la adquisición por licitación pública de los elementos considerados más indispensables al efecto, de acuerdo con el detalle que figura en planilla agregada.

Art. 2º — Fíjase como inversión máxima por ese concepto la suma de veinte millones quinientos mil pesos moneda nacional (\$ 20.500.000 m/n.) a prorratar en un período no menor de cinco años.

Art. 3º — Las partidas anuales que asigne el anexo I de trabajos públicos para obras portuarias, habilitación de muelles, rutas nuevas o mejoras de las existentes y trabajos a particulares que requieran trenes de dragado para su cumplimiento, concurrirán a contribuir a la renovación dispuesta en el artículo 1º, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo fijará anualmente, de acuerdo con lo informado por las oficinas técnicas respectivas, el porcentaje que corresponda a cada una de ellas, dentro del máximo del 15 por ciento.

En el plan de trabajos públicos de cada año se establecerá el monto total a que ascienden estas contribuciones.

Art. 4º — Para atender la parte no cubierta por las contribuciones previstas en el artículo 3º, queda facultado el Poder Ejecutivo a emitir, en la cantidad necesaria, títulos de la deuda pública interna.

Art. 5º — A los efectos de los artículos 1º y 2º queda autorizado el Poder Ejecutivo para licitar y contratar, total o parcialmente, según más convenga, los distintos elementos de dragado de la planilla

adjunta, no pudiendo comprometer en cada ejercicio, en concepto de pago de cuotas, con un interés no superior al 5 % anual, una cantidad mayor de cuatro millones de pesos moneda nacional (\$ 4.000.000 m/n.), debiendo incluirse en el plan de trabajos públicos de cada año el monto de la cuota correspondiente.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo dará cuenta anualmente al Honorable Congreso de la forma en que da cumplimiento a las prescripciones de esta ley.

Art. 7º — Comuníquese, etc.

Manuel R. Alvarado.

—A la Comisión de Obras Públicas.

VI

Comunicaciones de la Cámara de Diputados

NOTAS:

Comunicando que ha suspendido sus sesiones a la espera de los despachos de su Comisión de Presupuesto y Hacienda. (Al archivo).

—Comunicando que ha aceptado las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley reformando la ley 10.650. (Al archivo).

PROYECTOS DE LEY EN REVISIÓN:

Sobre Banco Central, ley de bancos, Instituto Movilizador, modificaciones a las leyes orgánicas de los bancos de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional, y ley de organización.

4

LEY DE BANCOS Y MONEDA. — MOCION

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra.

Hago moción para que se trate sobre tablas, inmediatamente después de leídos los asuntos entrados, los proyectos financieros enviados en revisión por la Cámara de Diputados, y de que acaba de dar cuenta la Secretaría.

Sr. de la Torre. — ¿Que se trate sobre tablas...?

Sr. Arancibia Rodríguez. — Las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados sobre los proyectos financieros del Poder Ejecutivo.

Sr. de la Torre. — ¡No, señor! Las modificaciones son de suma importancia. Yo deseo intervenir en la discusión y solicito que la Cámara se ajuste al procedimiento ordinario, es decir, que los proyectos pasen a la comisión y vuelvan despachados.

Ya la primera vez no tuvimos tiempo de estudiar suficientemente los proyectos; no se accedió a las razones de hidalguía que se invocaron, y ahora se pretende seguir el mismo procedimiento. No hay ninguna razón de ur-

gencia que justifique la moción que se formula.

Hago moción de que pasen a comisión los proyectos venidos en revisión, siguiendo el procedimiento ordinario.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Pido la palabra.

Yo mantengo mi moción, señor presidente, porque considero que son asuntos definitivamente meditados y estudiados, dentro y fuera del Congreso. Como no hay nada en discusión en general, nada nuevo ni fundamental que pueda decirse en este debate, estimo que estamos habilitados para votar por sí o por no, es decir, si aceptamos o rechazamos las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.

Entiendo, desde mi punto de vista, que estamos habilitados perfectamente para dar nuestro voto con entera conciencia, sobre estos proyectos.

Sr. de la Torre. — Está equivocado el señor senador. Una sola de las enmiendas, la que se refiere a la naturaleza de los documentos que pueden ser redescontables, la que sustituye con documentos no comerciales los documentos comerciales que estaban en el proyecto del señor Niemeyer, y en el proyecto originario del Poder Ejecutivo, esa sola enmienda es de la mayor importancia y justificaría un debate de varias horas.

Sr. Arancibia Rodríguez. — Tratar estos proyectos sobre tablas no quiere decir que no se pueda discutirlos; no quiere decir que el señor senador no pueda intervenir en pro o en contra de esos proyectos; no se trata de restringir el debate, sino de darle el carácter de urgencia que tienen estos asuntos y que el señor senador lo ha desconocido en todo momento.

Sr. de la Torre. — Tratar sobre tablas un asunto de esta naturaleza implicaría un verdadero abuso.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor senador por San Luis de tratar sobre tablas las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a los proyectos financieros.

Sr. de la Torre. — Pido votación nominal.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Se va a proceder a tomar la votación nominal.

—Votan por la afirmativa, los señores senadores: Sánchez Sorondo, Santamarina, Castillo, Campos, Lubary, Vidal, Ceballos Reyes, Porto, Montenegro, López Peña, Rothe, Arancibia Rodríguez y Landaburu.

—Votan por la negativa, los señores senadores: Palacios, de la Torre, Matienzo y Bravo.

Sr. Secretario (Figueroa). — Han votado 13 señores senadores por la afirmativa y 4 por la negativa.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Se tratará después de concluirse de dar cuenta de los asuntos entrados.

5

ASUNTOS ENTRADOS

VII

Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados

Sobre la observación formulada por el Poder Ejecutivo al artículo 5º de la ley 12.140. (A la Comisión de Obras Públicas).

Proyecto de ley en revisión

Sobre régimen legal del petróleo.

6

REGIMEN LEGAL DEL PETROLEO. — MOCION

Sr. Arancibia Rodríguez. — Hago moción para que se trate este asunto sobre tablas, a continuación de los asuntos que acaba de resolver la Cámara considerar inmediatamente en la sesión de hoy.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor senador por San Luis.

—Se vota y resulta afirmativa.

7

ASUNTOS ENTRADOS

VIII

Denuncia del senador Cantoni

San Juan, 1º de Febrero de 1935.

Señor presidente del Honorable Senado Nacional, doctor Julio A. Roca.

Buenos Aires.

Pongo en su conocimiento y por su intermedio en el del Honorable Senado, que hace una semana empleados policia, por orden gobierno provincial, detienen mi automóvil y arrestan a toda persona que me acom-

misma noche, apareció el comunicado o noticia que yo había solicitado y el presidente no había aceptado. Sobre esto, nunca le pedí explicación.

Sr. Landaburu. — No tenía ninguna explicación que pedirme.

Sr. de la Torre. — El señor senador se había negado a rectificar la información de los diarios, y después la información apareció.

Ese día fué cuando yo hice presente que me había llegado por correo un folleto del Ministerio de Agricultura. ¿Y qué pasó después? Volvió a negarse...

Sr. Landaburu. — Yo no me he negado nunca, y apelo a su caballerosidad para que lo declare ante la Cámara, a ninguna medida de investigación, que el señor senador o los demás compañeros de comisión hayan propuesto en su seno. ¿No es así?...

Sr. de la Torre. — Acabo de decir a lo que se ha negado.

Sr. Landaburu. — La rectificación que apareció en los diarios en esa tarde era una concesión que yo hacía a la exigencia del señor senador, que no podía estar tranquilo después que los diarios le habían hecho el cargo de inactividad.

Sr. de la Torre. — Y entonces me dijo el señor presidente: diga usted a su nombre lo que quiera.

Sr. Landaburu. — Eso se lo había dicho yo antes, de manera que después no tenía por qué consultarme. Yo, creyendo que el señor senador no iba a hacerlo, y como una concesión a su pedido, hice la breve rectificación a la que se ha referido. Después de eso, holgaba mi permiso, y el señor senador se lo tomó para eso y algo más, lo que colocó a la comisión en una situación difícil, haciéndola aparecer como dictando pronunciamientos y anticipos de opinión, cuando no había llegado la oportunidad de traer los antecedentes al Senado.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Queda terminada la incidencia.

11

MOCION. — TARIFA DE OBRAS SANITARIAS

Sr. Campos. — Pido la palabra.

Antes de que el Senado entre a tratar, como lo ha resuelto, los proyectos venidos en revisión de la Cámara de Diputados sobre bancos y moneda y legislación del petróleo, pido que también se trate sobre tablas, después de la consideración de esos asuntos, el del veto del

Poder Ejecutivo al proyecto de ley sobre reformas a las tarifas de obras sanitarias.

Hago, pues, esta moción. Se trata de una sanción que viene de la Cámara de Diputados y que no ha de tomar mayor tiempo a la Honorable Cámara.

Nada más.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Se va a votar la moción del señor senador por Jujuy.

Sr. de la Torre. — ¿En qué consiste la moción?

Sr. Campos. — En que se trate sobre tablas, inmediatamente después de la consideración de los proyectos sobre planes financieros y legislación del petróleo, el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, referente al veto del Poder Ejecutivo a la ley sobre tarifas de obras sanitarias.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

12

BANCOS Y MONEDA

Sr. Presidente (Bruchmann). — Corresponde tratar ahora las modificaciones de la Cámara de Diputados a los proyectos de ley sobre bancos y moneda.

Sr. de la Torre. — ¿No hay informe?

Sr. Presidente (Bruchmann). — No, señor senador.

Sr. de la Torre. — Pido la palabra.

El debate sobre estos proyectos en la Cámara de Diputados y las modificaciones que introdujo la Comisión de Presupuesto con anterioridad a él, prueban la razón que tuvimos el señor senador por la Capital, doctor Palacios, y yo, cuando instamos al Honorable Senado a no expedirse a la carrera. Por no haber seguido esa discreta sugestión, ha quedado en una posición deslucida ante la opinión pública, resultante de no haber dedicado al asunto más grave que ha ocupado al Congreso en los últimos veinte años, el estudio que necesitaba y de haberse dejado impresionar por vagos anuncios de catástrofes imaginarias.

Sometidos los proyectos a un análisis más minucioso en la otra Cámara, resulta evidente la precipitación con que ha procedido el Senado.

No he de detenerme a considerar todas las críticas fundadas que se han hecho, porque no me lo permiten disposiciones reglamentarias concernientes al tratamiento de los proyectos

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

en revisión y en particular, pero como no se trata, a diferencia de lo que dijo recién el señor senador por San Luis, de meras modificaciones en la redacción de uno u otro artículo, sino de conceptos generales que en muchos casos sustituyen otros conceptos generales del proyecto originario, se me ha de permitir que eche una mirada de conjunto sobre el estado actual de estos proyectos, cuya redacción obscura se ha ido aclarando poco a poco. Espero que se me lo ha de permitir, hasta por la razón de que en el primer debate no se me dió el tiempo que necesitaba.

Ahora es otra cosa; ahora ya sabemos a qué atenernos; ahora la hojarasca del juego de las compensaciones ha sido aventada, demostrándose que se emitirán muchos millones de pesos en provecho del Poder Ejecutivo, como yo lo había anunciado en mi primer discurso, pero no habiendo dispuesto sino de cuatro días, me faltó materialmente tiempo para traducir en asientos de contabilidad y en cifras definitivas mis manifestaciones. Eso se ha podido hacer en la Cámara de Diputados. Lo ha hecho el diputado Godfrid en un discurso notable por su precisión, por su profundidad y por su forma, que el señor ministro de Hacienda tuvo que escuchar y aceptar en silencio: quien calla, otorga. (Risas).

El «truec» estaba en los artículos 12 y 13, de la última de las leyes, la de organización, que dicen: el 12; «Después de cumplidas las disposiciones del artículo anterior y una vez apartados los fondos requeridos por el gobierno nacional a los fines del cumplimiento del artículo 5º de la ley de creación del Banco Central, la comisión organizadora determinará, ad referendum del Poder Ejecutivo, el monto definitivo de los fondos de reserva del Instituto Movilizador destinados a posibles quebrantos.» Y el 13: «La diferencia entre el monto inicial de la reserva constituida, conforme al artículo 2º de la ley de creación del Instituto Movilizador y el fondo definitivo según el artículo anterior, será transferida al gobierno nacional, el cual lo destinará íntegramente a la cancelación de la deuda flotante bancaria.»

El mecanismo que funciona detrás de estos dos artículos no puede ser más sencillo: los 667.000.000 de la revaluación, que se decían destinados para el Instituto Movilizador de las inversiones bancarias, no son para el Instituto Movilizador, pues el Poder Ejecutivo se reserva, por el artículo 13, la facultad de disponer a su antojo, en el momento que se le ocurra, sin con-

sultar al directorio del Banco Central, ni al directorio del Instituto Movilizador, de disponer, fuera de una parte limitada, que se asigna al Instituto Movilizador, de todo el resto para el pago de deudas. El pago de deudas, lo mismo públicas que privadas, lo mismo flotantes que consolidadas, no puede hacerse sino teniendo efectivo o librando cheques, y eso, más tarde, o más temprano, es la emisión.

El juego de las compensaciones resulta, pues, un engaño. Refleja la situación que se crea en el primer momento, antes de que el Poder Ejecutivo haya determinado el destino de los fondos que se adjudican al Instituto Movilizador, pero después cambia por completo la situación.

Consumado el error de sancionar estos proyectos, podrá discutirse si la emisión llegará a 600, a 500 o a 300.000.000, pero emisión, inflación, habrá, lo que deja en muy mala posición a las seguridades en sentido contrario que dió reiteradamente el señor ministro de Hacienda. (1)

Otro concepto general que es necesario aclarar y rechazar con motivo de la discusión de estas enmiendas, es la inexactitud de referir al señor Niemeyer la verdadera paternidad de los proyectos. Podrán encontrarse en el articulado secundario, que es análogo en la mayor parte de los estatutos de bancos centrales, numerosas disposiciones que hayan sido tomadas del proyecto Niemeyer, pero afirmo que en todo lo fundamental este proyecto es la negación de las ideas del señor Niemeyer. Y no me refiero a lo que podría llamar la situación externa que debía prepararse para que el Banco pudiera funcionar, — como ser el equilibrio del presupuesto, etcétera, — sino a la estructura genuinamente bancaria. En ese terreno, este proyecto es todo lo contrario de lo que el señor Niemeyer quiso e intentó hacer.

El punto de partida del señor Niemeyer, ¿cuál es? Los gobiernos no tienen nada que hacer en los bancos centrales; los gobiernos no deben ser capitalistas de los bancos centrales. Y en el proyecto que redactó en el año 1933 y que entregó al ministro de Hacienda, el gobier-

(1) En Estados Unidos la revaluación del oro produjo 2.675.000.000 de dólares de ganancia. Se destinaron 2.000.000.000 para Fondo de Estabilización del dólar y se aplicaron 675.000.000 al retiro de los títulos que garantizaban las emisiones de los bancos nacionales, obligando a éstos a retirar sus billetes de la circulación. Entre nosotros el gobierno se apropia la ganancia.

no no podía subscribir capital y le estaba prohibido adquirir después acciones. ¿Qué dispone este proyecto? Entra en materia haciendo al gobierno subscribir la mitad del capital y, en seguida, en un artículo perdido por ahí, establece que las acciones son transferibles. Por consiguiente, no se impide que el gobierno adquiera acciones por transferencia. No queda nada en pie del concepto central del señor Niemeyer, y las consecuencias del cambio son muy grandes. Nuestro Banco Central, con el andar del tiempo y sin apartarse en nada de la ley, podrá concluir siendo un Banco enteramente oficializado, y en tiempo no lejano el gobierno podrá manejarlo como quiera.

Dije que soy partidario de los bancos centrales creados en su oportunidad y sujetos a determinadas condiciones. Yo no he dicho que sea partidario pura y simplemente de los bancos centrales, como me lo ha hecho decir el señor ministro de Hacienda, porque si me hubiera expresado así, combatiría este proyecto por capricho o por espíritu de oposición, y no es así; combato este proyecto con entera conciencia, porque veo un articulado que lo va a conducir fatalmente a ser un instrumento de inflación puesto en manos de los gobiernos, para que hagan con él lo que quieran, y para concluir como concluyen siempre estos bancos oficiales, sobre todo en estos países de América.

La divergencia con el señor Niemeyer respecto de la forma de constitución del capital del Banco, exigía alguna explicación que el señor ministro de Hacienda debió dignarse dar al Congreso, fuera en el Senado o en la Cámara de Diputados, pero nada ha dicho, absolutamente nada. En la exposición de motivos, insinúa algo: que la subscripción de la mitad del capital por el gobierno acentuará el carácter público del Banco. Encuentra una ventaja en lo de acentuar «el carácter públicos». Pero yo pregunto a los señores senadores si ese embolismo del carácter público es un argumento o es una argucia.

¿Qué quiere decir carácter público refiriéndose a un Banco? ¿Acaso hay bancos que no traten con el público? ¿Acaso el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos ha necesitado que el gobierno le aporte capital para poder tratar con el público? Para que tuviera algún sentido esa expresión socorrida del señor ministro de Hacienda, habría que llegar a esta conclusión: carácter público significa carácter oficial, pero eso no puede ser, porque se daría de encontronos con los otros párrafos de la exposición de motivos, los más

declamatorios, en los que reclama la absoluta independencia del Banco. Entonces, si lo que dice el mensaje, no puede significar carácter oficial, no significa nada y no se ha explicado nada.

No puede explicar lo que es contradictorio con las recomendaciones del perito británico.

Vinculado con la independencia del Banco Central del gobierno, hay otro punto en que también este proyecto se aleja enormemente de las ideas del señor Niemeyer y es la constitución de su directorio y el nombramiento de su presidente. Para el señor Niemeyer el gobierno no debe tener intervención; el presidente y los directores deben ser nombrados por la asamblea de accionistas, con la salvedad de que los nombramientos de presidente y vicepresidente deben ser aprobados por el Poder Ejecutivo; una cosa es aprobar un nombramiento hecho por los accionistas y otra cosa es nombrar directamente como dispone este proyecto. Tampoco lo explica. Apenas si ha aludido al nombramiento del presidente y los directores, «la primera vez», con motivo de la observación que yo hice acerca del manotón que daba el Poder Ejecutivo apropiándose durante 7 años de la presidencia del nuevo Banco, y lo presenté como una demostración de los propósitos absorbentes y dictatoriales que anidan en el fondo de estas iniciativas. El señor ministro de Hacienda, dijo: ¡como propósitos dictatoriales!, si el señor Niemeyer es quien ha propuesto la forma adoptada por el Poder Ejecutivo. El primer directorio lo debe nombrar el Poder Ejecutivo a propuesta de la comisión organizadora, dispone el proyecto Niemeyer, y esto es lo que propone a su vez, el Poder Ejecutivo. Sí, pero el señor ministro se cuida muy bien de decir que una cosa era la comisión organizadora propuesta por el señor Niemeyer y otra cosa es la comisión organizadora que ha proyectado el Poder Ejecutivo. La comisión organizadora del proyecto Niemeyer se formaba con un representante de los bancos particulares, un representante de los bancos extranjeros, un representante del Banco de la Nación, un representante de la Comisión de Redescuentos, un representante de la Oficina de Control de Cambios; mientras que la Comisión Organizadora de acuerdo con esta magnífica ley que se va a votar, se compondrá de cuatro personas sin calificación, que el Poder Ejecutivo nombrará, y presidirá el ministro de Hacienda.

El único punto de coincidencia con el señor Niemeyer, es que la comisión será presidida por el ministro de Hacienda.

El señor ministro de Hacienda podrá nombrar

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

cuatro-empleadillos del ministerio. La comisión organizadora del proyecto Niemeyer podía constituir un control, un verdadero obstáculo para impedir un mal nombramiento y la comisión organizadora de esta ley, no.

Otra divergencia grave de este proyecto con las ideas del señor Niemeyer, que acentúa el abuso que se comete al invocar su nombre prestigioso para pasar un contrabando, es el punto que recordé en el breve diálogo con el señor senador por San Luis: los documentos redescontables.

Para el señor Niemeyer no pueden existir sino dos clases de documentos redescontables. Primero, los pagarés comerciales con dos firmas a 90 días, representativos de un movimiento real de mercaderías; segundo, los documentos emergentes de transacciones sobre productos agrícolas y ganaderos a 150 días, máximo de plazo, con dos firmas.

Estas restricciones, señor presidente, pueden llamarse clásicas y es sorprendente que el señor ministro de Hacienda no haya entendido su finalidad y haya admitido que pueda redescontarse cualquier documento, desde el documento de favor, hasta el documento directo a un Banco no representativo de ningún movimiento real de mercaderías.

El proyecto del Poder Ejecutivo se había ajustado al del señor Niemeyer, pero en el Congreso se le ha cambiado completamente el sentido, de acuerdo con el ministro.

El señor Niemeyer, banquero muy experto, no puede dejar de hacer la distinción que ahora no se hace en este proyecto criollo. La distinción entre la solvencia de las firmas de un documento y la influencia sobre el empapelamiento, porque el empapelamiento no se evita aunque los documentos sean solventes. Ese fue el error en que incurrió el señor senador por Mendoza, presidente de la Comisión de Hacienda, doctor Arenas, cuya ausencia lamento en este momento, cuando recogiendo la observación inicial que yo hice, contestó: que tan solvente puede ser el documento de una firma como el documento de dos firmas, y citó la sola firma de Rostchild, que por sí sola puede valer más que muchas firmas. No era esa la cuestión que yo había planteado.

Rostchild podría causar el empapelamiento, si redescontara en abundancia documentos de favor no representativos de un movimiento real de mercaderías.

Esta es una idea sencilla que está ligada a otro concepto, también ausente de estos proyectos, el concepto de que el redescuento de

papeles para respaldar una emisión, en el fondo, no es deseable. Lo suelen exigir situaciones especiales del mercado, sea la actividad repentina de las transacciones, o sean las contracciones de la circulación que se producen a veces sin poder explicar la causa, y cuando el mercado demanda mayor circulante, es conveniente darlo. No lo creía el señor ministro de Hacienda, por supuesto, cuando desde la tribuna del Instituto de Estudios Superiores proclamaba que eran suficientes las reservas normales para afrontar esas situaciones; en cambio, lo creía yo, cuando presenté mi proyecto de ley de redescuento en el año 1913. Empero, lo deseable sería que la plaza pudiera manejarse con el circulante normal y los cheques. No debe fomentarse el redescuento, ni inventar documentos redescontables cuando no los hay; la directiva debe ser restringir en lo posible el redescuento.

El señor ministro de Hacienda, tomado in fraganti en un cambio de frente del proyecto del Poder Ejecutivo a las modificaciones fundamentales de las comisiones de las dos cámaras, tenía que defenderse de una inconsecuencia, y como la defensa no era fácil, resolvió acudir a una táctica que suele ser eficaz, por lo menos socorrida: la de tomar la ofensiva, la de atacar en lugar de defenderse, y eligió un recurso que es también muy propio de su modalidad y de su mentalidad: tratar de ignorantes a todos; todos son unos grandes ignorantes, nos dijo. Se metió en un laberinto tal de contradicciones que me autorizan a afirmar que a veces el señor ministro no sabe lo que dice.

Acepto la responsabilidad de demostrarlo. Sería injustificable que lanzara un cargo así y no pudiera probarlo. Además, al probarlo, haré la historia de un proceso no bien conocido, porque a veces perecería que los legisladores mismos ignoran ciertas cosas. Los que han votado no saben a veces, lo que han votado. Haré la historia del proceso mediante el cual se ha llegado a substituir por documentos no comerciales los documentos comerciales.

El primer conato de lanzamiento del Banco Central remonta, como se sabe, al gobierno de facto. El proyecto de aquel gobierno ha sido publicado, ahora, en el despacho de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, con el nombre de «proyecto Uriburu». Se ha entendido siempre que la paternidad de ese proyecto pertenecía al doctor Prebisch que fué, en realidad, quien elaboró todos los proyectos financieros, fiscales e impositivos del gobierno de

facto. Era un proyecto francamente emisionista. En los artículos correspondientes, encontrarán los señores senadores los documentos que pueden redescontarse, y se preguntarán cuáles son los que no pueden redescontarse.

Puede redescontarse todo: pagarés comerciales a 90 días con dos firmas; pagarés no comerciales a 90 días con una firma; pagarés a 180 días con una firma, etcétera; sólo ha faltado incluir el papel de diario.

El doctor Hueyo, ministro de Hacienda poco después, no dió curso a aquel engendro emisionista y quedó interrumpida la trayectoria del Banco Central. Poco después llegó al país el señor Niemeyer, quien volvió las cosas a su quicio. Hizo su proyecto y estableció que los documentos redescontables, para poder respaldar la emisión, serían los comerciales a 90 días con dos firmas o los documentos emergentes de transacciones, sobre productos agropecuarios con dos firmas.

Por fin, apareció en esta Cámara el 17 de Enero de 1935 el proyecto del Poder Ejecutivo. Reproducía con ligeras variantes el proyecto del señor Niemeyer, en lo referente a los documentos redescontables.

El artículo 32, inciso d), dice: «Redescontar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran en las condiciones establecidas por el directorio, documentos provenientes de operaciones comerciales que representen un movimiento real de mercaderías, lleven por lo menos dos firmas solventes, venzan a más tardar dentro de los 90 días, a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio», etcétera.

Y el inciso e), dice: «Redescontar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, en las condiciones establecidas por el directorio, documentos emergentes de transacciones en productos agrícolas o ganaderos que lleven por lo menos dos firmas, de las cuales una sea bancaria, venzan a más tardar dentro de los 180 días a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio», etcétera.

A primera vista, estos dos incisos parecen reproducir las restricciones del proyecto Niemeyer, pero observando más atentamente, se descubren en su texto las mismas sutilezas y contradicciones que campean en los cinco proyectos.

Con todo, se conserva la condición esencial: los documentos comerciales deben representar un movimiento real de mercaderías y tener dos firmas. El endoso del Banco solicitante del redescuento, sin el cual no podría transferirse el

documento, no se considera en ninguna parte como una firma del mismo. No existirían, si así no fuese, documentos de una sola firma. De computar el endoso del Banco que solicita el redescuento, todos los documentos serían de dos firmas por lo menos.

El proyecto pasó a estudio de nuestra Comisión de Hacienda, y el señor senador por Mendoza, que no ha hecho misterio de sus inclinaciones emisionistas en su actuación legislativa, introdujo la enmienda a que me referí hace un momento. Allí donde decía el proyecto «documentos provenientes de operaciones comerciales que representen un movimiento real de mercaderías, lleven por lo menos dos firmas, etcétera», él agregó: «de las cuales una sea bancaria». Es decir, suprimió la segunda firma inherente a los documentos comerciales, y la substituyó por el endoso del Banco, habilitando así para el redescuento los pagarés directos, no representativos de mercaderías en movimiento. Es precisamente lo que el señor Niemeyer había querido impedir y, sin embargo, se sigue hablando de que este proyecto es idéntico al del señor Niemeyer.

La modificación introducida por la Comisión de Hacienda lo cambia todo, haciendo entrar al redescuento y, por lo tanto, al respaldo de la emisión de billetes, pagarés con una sola firma, o lo que es lo mismo, los pagarés directos no comerciales y eventualmente, los pagarés de favor.

El artículo quedaba con una redacción absurda. ¿Cómo puede representar un movimiento real de mercaderías un pagaré con una firma? Para que las mercaderías se muevan es indispensable que haya un vendedor y un comprador, es decir, dos firmas. El comerciante A, compra 5.000 sombreros o 5.000 pares de zapatos al comerciante B, y B endosa el documento a un Banco, que a su vez lo lleva a redescontar al Banco Central.

La Cámara de Diputados, donde ha prevalecido el criterio emisionista, resolvió arreglar las cosas, yendo a Roma por todo, y corrigió el artículo. Le quitó la hoja de parra que le había dejado el señor senador por Mendoza; suprimió lisa y llanamente la exigencia del proyecto del Poder Ejecutivo originaria del señor Niemeyer, de que los documentos emergentes de operaciones comerciales llevados al redescuento del Banco Central, representen un movimiento real de mercaderías.

El artículo 32, inciso d), quedó así después de la amputación: «Redescontar a los bancos accio-

nistas y a los bancos que no lo fueran, documentos provenientes de operaciones comerciales relacionadas con la negociación de mercaderías que lleven por lo menos dos firmas solventes, de las cuales una sea bancaria, vengán a más tardar dentro de 90 días a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio», y en esa forma se va a votar.

No es eso todo. El inciso e) del mismo artículo 32, da otro paso adelante. El señor Niemeyer autorizaba en su proyecto el redescuento de «letras de cambio y pagarés» emergentes de operaciones sobre productos agrícolas ganaderos, a 150 días, con dos firmas. Esas operaciones con dos firmas no pueden ser otras que de compraventa.

El Poder Ejecutivo reformó el proyecto Niemeyer, siempre en sentido emisionista y en vez de «letras de cambio y pagarés» a 150 días, puso solamente «documentos emergentes de transacciones de productos agrícolas ganaderos, de 180 días de plazo con dos firmas». Pero la Cámara de Diputados no podía aceptar una enmienda tan tímida y a fin de que todo sea redescontable en el Banco Central, donde decía «documentos emergentes de una transacción», puso «documentos relacionados con la producción, elaboración o negociación de productos agropecuarios o industriales, con una firma».

El inciso e) ha quedado así: «Redescantar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, documentos provenientes de operaciones relacionadas con la producción, elaboración o negociación de productos agropecuarios o industriales, que lleven por lo menos dos firmas, de las cuales una sea bancaria, vengán a más tardar dentro de los 180 días a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos, etcétera.»

En 15 días desaparecieron todas las restricciones imaginadas en el proyecto del señor Niemeyer, aceptadas en el del Poder Ejecutivo. y ahora se podrá llevar todo al redescuento. Con razón, el límite posible de la emisión se ha elevado a 5.800.000.000.

Eso es lo que ha votado la Cámara de Diputados y seguramente va a votarse aquí en el Senado; eso es lo que defiende el señor ministro de Hacienda no obstante haber propuesto lo contrario en el proyecto del Poder Ejecutivo.

Dada esta explicación del proceso de transformación del artículo 32, véase cómo me sobra razón para afirmar que el ministro de Hacienda, en ciertas oportunidades, no sabe lo que dice.

En la sesión del 30 de Enero, haciéndose cargo de mis observaciones del día anterior, dijo. «Ayer se ha indicado como una aberración propia del espíritu con que este Banco nace, el que permita descontar papel con una sola firma, además de la firma del Banco. No hay tal aberración. Todo el que lea las leyes monetarias modernas y las exposiciones de los teóricos modernos, en lugar de traer al Senado las reminiscencias de viejos principios que hace ya rato están encarpetados, sabrá que se puede sin peligro operar con una sola firma, y que es imprescindible autorizarlo si se quiere que haya alguna clase de papel».

Si esto fuera exacto, ¿cómo se explica que exigiera dos firmas y un movimiento real de mercaderías el proyecto del Poder Ejecutivo que suscribió el señor ministro? ¿Qué ignorancia de ministro! ¿Qué anacronismo de ministro! ¿Cómo se explicaría que el señor ministro fuera un ignorante el 17 de Enero cuando envió el proyecto al Congreso, exigiendo las dos firmas y un movimiento real de mercaderías, y un sabio el 30 de Enero cuando pronunció las palabras que acabo de leer?

El proyecto Niemeyer también exige las dos firmas; luego el señor Niemeyer es otro ignorante, como yo, que no lee las leyes monetarias modernas ni los teóricos modernos y que habla por reminiscencias encarpetadas. Pero si el señor Niemeyer es un pobre diablo, ¿por qué lo toma de escudo el señor ministro pretendiendo hacer creer al público que las enormidades que contiene el proyecto en discusión están amparadas por la alta autoridad del señor Niemeyer? Pero no hay duda, el único que tiene conocimientos es el señor ministro; el único que ha leído la última revista del Midland Bank es el señor ministro; el único que lleva su modernismo hasta contradecirse cada cinco minutos, es el señor ministro.

A mí no me convence del todo; sospecho que su sabiduría es infundida por el doctor Prebisch, y le sucede que a veces se olvida de lo que el doctor Prebisch ha dicho y se producen las contradicciones: el doctor Prebisch va por un lado y el ministro por otro. El doctor Prebisch le escribe todos los mensajes, le prepara todos los proyectos, le induce a aceptar los que considera inconvenientes, como sucedió con el proyecto de precio mínimo de los cereales, le redacta todos los reportajes, le prepara todas las memorias, le hace todos los cálculos, incluso aquel del juego de las compensaciones (*risas*), y desde su estratégica situación de director de la

Revista Económica del Banco de la Nación, donde dispone de una nube de empleados, le suministra todo el material de información bancaria y monetaria que luego él exhibe como fruto de sus investigaciones personales.

La revista del Banco aparece cada diez meses con un material recalentado, pero el ministro está al día y puede hacer citas.

Otro punto en que también este proyecto se aparta de las ideas del señor Niemeyer, es el que se refiere al límite que puede alcanzar la emisión de billetes. En este proyecto es de 5.800.000.000, respaldados por 246.000.000 de pesos oro y el «Fondo de Divisas».

El señor Niemeyer en la página 16 de su informe (edición del Ministerio de Hacienda), dice: «Podría pensarse que se debiera establecer un límite absoluto a la emisión de billetes. Un máximo de esa naturaleza, siempre que no fuera tan elevado como para no llegar nunca a ser efectivo, podría parecer la forma más simple de preverse contra la inflación». A juicio, pues, del señor Niemeyer, si se establece un máximo no debe alcanzar una cantidad fantástica e innecesaria, pero él no cree que la fijación del máximo haya de dar resultados satisfactorios y prefiere que dependa el monto de la emisión del volumen del crédito acordado por el Banco Central, de acuerdo con las recomendaciones de su informe en el cual se limitan los papeles redescontables. Y considerando el caso concreto de la emisión argentina, agrega estas palabras categóricas que han olvidado el señor ministro de Hacienda, la Comisión de Hacienda y el Senado al abrir las puertas al redescuento de papeles de favor: «El monto de la emisión actual — dice en la página 16 — es más que suficiente para atender cualquier demanda de circulante que pueda presentarse en el futuro próximo».

Tenemos, entonces, establecida con claridad, la incongruencia de este proyecto, que autoriza una emisión posible de 5.800.000.000, notoriamente superior a las exigencias del mercado y contraria a las ideas del señor Niemeyer.

El proyecto en discusión tampoco está dentro de las ideas del señor Niemeyer, en lo referente a la revaluación del oro ni al destino de la ganancia resultante.

El artículo 7º del proyecto Niemeyer, dice así: «Si una vez levantado el control de los cambios y establecido por una nueva ley monetaria el valor legal externo del peso, fuera necesario proceder a una nueva valuación de las existencias de oro del Banco Central de Reserva, toda ganancia que resultara de esa operación será des-

tinada en primer término, a la extinción de la deuda no productiva de interés del gobierno, mencionada en el apartado primero, y el excedente, si lo hubiera, se destinará al rescate de las letras de Tesorería del gobierno nacional».

La deuda no productiva de interés a que se refiere, no es otra que la emisión sin garantía, el bono que el gobierno debe dar al Banco Central por la emisión sin garantía.

El proyecto en discusión realiza la revaluación sin que haya cesado el control de los cambios y no destina la ganancia a retirar los billetes que circulan sin garantía, sino a pagar deuda flotante bancaria después de haber cancelado letras de Tesorería, obligando al Banco de la Nación a recibir 250.000.000 y al Banco Central a comprarlos junto con otros 150.000.000 de la Caja de Conversión.

Todas estas son divergencias de una gran importancia, cuya razón de ser debió explicarse, pero, lejos de eso, el señor ministro guarda un profundo silencio y consigue por ese medio que el grueso público que nunca entiende a fondo estas cosas, crea que los proyectos han sido inspirados por el señor Niemeyer.

Las consecuencias de esta innovación van muy lejos. El proyecto del señor Niemeyer dispone en el artículo 4º que mientras no se dé una nueva ley monetaria, queda fijado el valor interno del peso por el Banco Central de Reserva, incluyendo la existencia de oro en su balance, reducido a pesos papel al tipo en vigor de 44 centavos oro sellado, igual a 100 pesos moneda nacional, o sea por un valor de 560 millones en números redondos, mientras que el proyecto en discusión dispone que aquella misma reducción se haga a un tipo equivalente a 19,93 por 100 pesos, o sea 1.240.000.000.

Prescindiendo por el momento del aumento enorme de la ganancia que resulta de la revaluación al tipo de 19,93, me limitaré a señalar la diferencia que produce sobre el límite del redescuento, desde el momento en que el 25 % adoptado por Niemeyer ya no se aplicará a un respaldo a la par de 560.000.000, sino de 1.240 millones, lo que eleva la emisión a 5.000.000.000 y a 5.800.000.000 incluyendo el Fondo de Divisas.

¿Qué objeto tiene la autorización para emitir una cantidad tan enorme de billetes? El señor ministro no lo ha dicho. Habló muy extensamente en ambas Cámaras, pero sus discursos tienen la particularidad de cernirse siempre sobre el campo de las doctrinas y no descienden jamás a la realidad ni aclaran lo que deberían aclarar. No pudo decir qué razones explicarían

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión, 16ª Sesión extraordinaria

una emisión de 5.800.000.000 de pesos; y no podrá decir en descargo que no se le preguntó.

Se lo preguntó en la Cámara de Diputados, el diputado Godfrid con las sensatas y penetrantes palabras que voy a leer: «Si, como afirma el señor ministro, el objetivo principalmente perseguido con la instalación del Banco Central es el de organizar y coordinar elementos dispersos existentes, pero no el de emitir ni incrementar los depósitos que permitirían el aumento inmoderado de los medios de pago, en poder de la colectividad y si — repitiendo sus palabras — «a toda circulación adicional de depósitos o de billetes creada por el mismo — se refiere al Banco Central — deberá corresponder un incremento efectivo del volumen de las transacciones», ¿qué incremento efectivo de ese volumen de transacciones es el que espera el señor ministro para recomendar que, — vuelvo a repetir sus palabras — «el Banco ha de cuidarse en extremo de no usar con frecuencia la facultad que se le concede de reducir hasta el 25 % la garantía metálica de los billetes y los depósitos que constituyen su pasivo»? ¿Cuándo — pregunto yo — los negocios requerirán multiplicar casi por cinco la suma que representa la emisión actual, o sea llevar el pasivo del Banco Central a cerca de 6.000 millones de pesos, efectuando nuevas emisiones o depósitos por cerca de 5.000.000.000? ¿Quién es capaz de prever en qué época lejana los negocios serán cinco veces más importantes que lo son hoy, para que, por exigencia natural de los mismos, sin que una política emisionista lo provoque, el pasivo del Banco Central pueda llevarse a la fantástica suma antedicha? ¿No constituyen un motivo de lógica alarma y de inquietud las manifestaciones del Poder Ejecutivo al contemplar la posibilidad de que ese límite sea alcanzado?»

Tales fueron las palabras del diputado Godfrid que el ministro no contestó.

El párrafo del mensaje en que se aconseja no reducir «muy a menudo» hasta el 25 % la garantía metálica de los billetes y depósitos, es decir, no emitir muy a menudo los 5.800.000.000, se encuentra en la página 827 del orden del día; y dice: «El Banco Central ha de cuidarse, pues, en extremo de no usar «con frecuencia» la facultad que se le concede de reducir hasta el 25 % la garantía metálica de los billetes y depósitos que constituyen su pasivo.»

Todo esto, como digo, ha quedado sin explicación; pero el señor ministro se escapó por la tangente diciendo: «No se va a emitir. ¡Si los

grandes institutos de emisión no emiten, en general!»

La explicación es contraproducente; si no se va a emitir, si no se necesita emitir, ¿a qué se da la autorización para emitir hasta 5.800.000.000?

Admito, señor presidente, que el gobierno actual no tenga la intención de emitir; pero ¿sabe, acaso, el señor ministro de Hacienda, qué gobierno va a suceder al actual? ¿Sabe, acaso, el señor ministro de Hacienda qué gobiernos van a suceder después al que suceda al actual? ¿Y no teme por la suerte del país, que alguna situación futura, use esta autorización ilimitada que él propicia y emita 5.800.000.000 de pesos, redescontando cualquier clase de papeles?

¡Y no se puede creer que el señor ministro tenga en estos momentos una visión tranquilizadora de la política! Sufrió una terrible equivocación en la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando dijo estar seguro de que el Partido Demócrata Nacional ganaría la elección de Entre Ríos. (Risas). «Sí, señores» — dijo —, «todos los días crece la base de sustentación del gobierno. Estoy seguro de que la elección de Entre Ríos será pronto un índice elocuente de esa realidad.» Y fué el índice elocuente de una ilusión desvanecida.

Los cálculos electorales del señor ministro de Hacienda son tan erróneos como sus cálculos financieros. Siempre está seguro de lo que no va a suceder. (Risas). En la Cámara de Diputados lanzó una especie de clarinada, una especie de ruego emocionado a los representantes de todos los partidos para concurrir unidos a impedir el triunfo posible de hombres a quienes llamó «de otra civilización». Pongámonos en el caso de que esos hombres «de otra civilización», trogloditas o negros del África Central, llegaran al gobierno y fueran emisionistas. ¿Por qué les allana el camino imprudentemente? ¿Por qué no los deja que tengan mañana que afrontar ellos a la Nación, votando la ley que los autorice a emitir 5.800.000.000?

Usando una vieja imagen, yo diría que este proyecto tan caro al señor ministro de Hacienda, coloca al país encima de un barril de pólvora. Todo irá regularmente mientras no se encienda la mecha, pero la mecha está ahí a la vista y al alcance de cualquier gobierno inconsciente que quiera encenderla. Y no podemos tranquilizarnos cuando vemos aparecer la inconsciencia en este mismo proyecto, en que, sin necesidad, se coloca al país encima del barril de pólvora.

Los señores senadores van a votar con toda

tranquilidad lo que conduce al país al borde del abismo.

Es muy curioso el cambio. Hasta ayer no más la ley de rescuento, modificada por la del Empréstito Patriótico, autorizaba una emisión de 1.500 á 1.600.000.000 de pesos; había en circulación entre 1.200 á 1.300.000.000; cuando se llegaba a 1.300.000.000 todo el mundo temblaba. Ahora con toda tranquilidad se vota la posibilidad de emitir 5.800.000.000 de pesos.

El mantenimiento de la doble moneda, es otro de los puntos en que este proyecto está en desacuerdo con el del señor Niemeyer. El artículo 12 de este último dice: «Dentro de los 12 meses de la promulgación de la ley, el peso oro dejará de emplearse por el gobierno y se prohibirá que figure en las cuentas de los bancos y de las sociedades anónimas como unidad monetaria». El proyecto en discusión establece exactamente lo contrario. Deja subsistente la cotización de 227,27 que no ha sido fijada por ninguna ley y admite al mismo tiempo la doble unidad monetaria de 0,19.93 y 0,44.

En resumen: todos los puntos que he mencionado, se apartan de las ideas expuestas por el señor Niemeyer. Estos proyectos no emanan, entonces, del sesudo criterio del experto británico; son genuinamente criollos, influenciados por todos los malos cálculos y todos los malos intereses de la política criolla.

En su discurso anterior el señor ministro se refugió, como de costumbre, en la región de la doctrina y dejó sin respuesta las observaciones concretas que yo había formulado a los puntos más salientes de los proyectos.

A mí no me llamó la atención porque exactamente lo mismo había hecho en el debate del presupuesto, circunstancia que me permitió enumerarle de cuerpo presente, uno por uno, todos aquellos puntos, a cual más importantes, que había dejado en el tintero.

En aquel debate respetó la sinceridad de mis equivocadas convicciones; ahora ni eso se ha salvado. Permítaseme entonces que destruya algunos cargos de índole casi personal, porque si los consintiera con mi silencio, lesionaría mi autoridad, y, esté en la verdad o en el error, entiendo decir siempre honestamente lo que pienso sobre las cuestiones que trato.

Para el señor ministro soy un opositor sistemático. Cuando oí el apóstrofe, creí que me confundía con él, en los tiempos en que era un militante del socialismo y un demoledor implacable de la sociedad capitalista, a la que hoy

sirve con tan acendrado amor. Valiéndose de un debate célebre entre Alberdi y Sarmiento, me comparó a los gauchos malos de la política.

Bastaría, señores senadores, que recordara que en todos los tiempos esos gruesos dietarios han sido aplicados por todos los oficialismos a todas las oposiciones, para no dar mayor importancia al inofensivo ataque. No valdría la pena que me detuviera a demostrar las razones que me movieron a librar batallas, sucesivamente, contra los gobiernos conservadores, que implantaron en la Nación el régimen de los comicios fraudulentos, y contra los gobiernos radicales, que empezaron desde el día que asumieron el poder, a preparar con sus errores el desenlace del 6 de Septiembre.

No he de reclamar, tampoco, consideración alguna para una vida pública próxima a su término, que se ha mantenido siempre en la misma postura inicial, una vida pública que no se ha sentido jamás defraudada ni amargada por no haber alcanzado las altas posiciones, cuyos halagos efímeros enloquecen a los ambiciosos y a los insignificantes. (*¡Muy bien!*).

Mi actitud desde hace tiempo, señor presidente, se limita, más que a indagar los actos del gobierno, a analizar desde mi banca los proyectos que somete al Congreso y a prestar una cooperación decidida y leal al gobierno democrático y reformista de Santa Fe.

¿Desde cuándo los gauchos malos de la política proceden así? ¿Desde cuándo usan como única arma el razonamiento, persiguen como único propósito la difusión de ideas y remueven hechos, para interpretarlos? Los gauchos malos de la política, de cualquier índole y de cualquier estatura que sean, menosprecian la persuasión, esgrimen la injuria, atentos siempre a aprovechar la menor circunstancia para sacar ventajas personales.

Los gauchos malos de la política no tienen línea moral, cambian de opiniones, cambian de actitudes, cambian de partidos, cambian de amistades, sin el menor escrúpulo. Y yo, señor presidente, según dice el propio señor ministro de Hacienda, soy un opositor tenaz — no sé si me cree romántico — que no se rinde al halago de ninguna seducción, ni se atemoriza ante el furor de ninguna jauría.

Sería interesante que repasara todos mis actos de opositor, para ver si mis actitudes fueron razonables y justas, pero sería muy largo y voy a limitarme a algunos casos contemporáneos, que supongo habrán sido los más directos

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

mente aludidos en el apóstrofe del señor ministro de Hacienda.

Combatí la destrucción de los elevadores cooperativos de granos, que quizás habrían emancipado a los agricultores de las garras del monopolio y del latifundio, y combatí el plan de elevadores oficiales con que se lo reemplazaba, afirmando al Senado, en el momento de votarse, que el proyecto era irrealizable y que la licitación anunciada por el ministro de Agricultura, presente en el recinto, para seis meses después, no se haría. Naturalmente, el Poder Ejecutivo ganó la votación: los elevadores oficiales fueron aprobados, creo que por unanimidad de la mayoría, pero ya han pasado dos años y puedo preguntar quien tenía razón: ¿Dónde están los elevadores oficiales? ¿Cuándo se licitaron? Quedo perfectamente tranquilo cuando recuerdo esfuerzos honestos como el que realicé aquel día y me felicito de no compartir la responsabilidad del señor ministro de Hacienda, que era entonces diputado de la mayoría y que votó los elevadores oficiales, ni la responsabilidad de los señores senadores que malograron un noble y alto esfuerzo de los agricultores argentinos.

Combatí el *modus vivendi* con Chile, que lesionaba importantes intereses industriales argentinos, y combatí el viaje del presidente de la República a Río de Janeiro. Los dos actos motivaron severas censuras en el mundo oficial, pero han pasado también dos años, ¿y quién tenía razón?

Respecto del *modus vivendi* con Chile, me basta recordar mi revancha: consistió, poco tiempo después, al cumplirse los seis meses, en que el propio señor ministro de Relaciones Exteriores dejó sin efecto las cláusulas desacertadas que yo había combatido.

Y en cuanto al acierto de los viajes de jefes de Estado, que no van a consagrar ningún acontecimiento importante, que hable por mí la incidencia reciente en que el presidente de Chile y su ministro de Relaciones Exteriores han coincidido exactamente con lo que yo dije en este recinto, en contra de los viajes intempestivos e innecesarios, dejando a nuestro ministro de Relaciones Exteriores en una posición nada agradable.

Con motivo del mismo asunto, agregué que no creía exacto que se hubiera concluido ningún tratado que resolviese realmente en buenas condiciones el viejo problema de la yerba mate. Se contestó que sí. El supuesto tratado sirvió de pretexto para bailes, banquetes, desfiles

y condecoraciones, pero no ha llegado al Congreso argentino; han pasado dos años y los señores senadores saben que ese tratado no ha venido.

Combatí la política de las carnes, con la emoción profunda que no comparte el señor senador por San Luis, mi compañero de la Comisión Investigadora, a juzgar por las palabras que ha pronunciado esta tarde, con la emoción profunda que pongo toda vez que se trata de los intereses de la primera industria argentina. Nadie sospecha la violencia que me hice al combatir el Convenio de Londres, pero lo combatí porque consideraba de mi deber expresar lo que me parecía exacto; y dije entonces, que allí no había previsiones suficientemente claras que aseguraran la entrega de la cuota del 11 %, ni tampoco previsiones que aseguraran que las futuras reducciones de las importaciones serían prorrateadas entre la Argentina y los Dominios británicos. Ha sucedido exactamente lo que revelé. El ministro de Agricultura de Gran Bretaña, mayor Elliot, acaba de establecer, en alabanza de su propia gestión, que las importaciones de carne bovina de Australia, han aumentado desde el año de la Conferencia de Ottawa, del 76 % al 119 %, y las de Nueva Zelandia, del 82 % al 242 %, mientras que la importación argentina ha disminuido en el mismo período, de 116 % a 90 %. Y mientras las importaciones de carne ovina de Australia han subido del 46 % al 94 %, y las de Nueva Zelandia del 75 % al 93 %, las argentinas han disminuido de 108 % a 69 %. Y respecto de la efectividad de la cuota del 15 %, basta referirme a lo que esta misma tarde he dicho: han transcurrido dos años y no se sabe todavía cómo se hará en la República Argentina su distribución. Cuando prevé ese desenlace, me opuse a que se diera tanto en cambio de tan poco.

No espero ni pido, ni necesito que se me haga justicia en vida. Me basta que estén ahí los hechos para destruir las críticas. Y podría repetir lo que dije en circunstancias análogas, hace diez años en la Cámara de Diputados, en momentos en que me hacía la ilusión de que iba a retirarme definitivamente de la vida pública, repetí la frase del drama de Ibsen: «El hombre más fuerte de la tierra es el que está más solo».

Combatí la resistencia del gobierno actual a hacer economías y su furor por contraer empréstitos, y combatí el acrecentamiento de la deuda

pública. ¡Cuánto no ha hecho el ministro de Hacienda por demostrar que no tenían fundamento esas verdades! Vino al Congreso y dijo que las economías llegaban a 100.000.000 en un año. Pero no lo probó. Y vino a decir que la deuda pública sólo asciende a 3.600.000.000 y no a 4.100.000.000, como yo aseguré, pero no lo probó.

Va llegando el momento de la rendición de cuentas; ya en el último debate de la Cámara de Diputados se dió lectura a un informe del Ministerio de Hacienda expedido con mucha demora, respecto de las vacantes llenadas y de los nombramientos hechos, y el informe es lo bastante categórico para poder ver que las economías han sido otro cuento. Dice así: «Las vacantes producidas en 1932 fueron 5.217 y los nombramientos 5.306. En el año 1933, las vacantes producidas fueron 5.247 y los nombramientos 7.522. En 1934, las vacantes fueron 3.132 y los nombramientos 6.058.» Palabra oficial. Bastaría con que los nombramientos hubieran sido iguales a las vacantes para que ya no hubiera economía y las han excedido.

Y respecto de la deuda de 4.100.000.000 de pesos, yo he hecho lo que podía hacer: he tomado de una publicación responsable una planilla y la he leído. En esa planilla está el detalle de todos los títulos emitidos, en circulación, y de la deuda flotante, y esa planilla el señor diputado Noble la ha hecho insertar en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados. El señor ministro de Hacienda, que tiene a su disposición a la Contaduría General de la Nación — cuyas memorias ya no aparecen — y que tiene millares de empleados y asesores famosos cuyo mérito exalta el máximo, no ha podido hacer otra planilla que diga cuáles y cuántos son los títulos en circulación, y se contenta con afirmar rotundamente que la deuda total es de 3.600.000.000 de pesos. ¡Una afirmación en el aire no vale nada!

Y, por último, combatí el presupuesto de 1.000.000.000 de pesos con 120.000.000 de déficit. ¡Cómo no lo iba a combatir!

Tales son mis ataques al gobierno, y en presencia de ellos el señor ministro no encuentra en su luminosa inteligencia, y en el mar sin orillas de sus lecturas cosmopolitas, sino el agravante apóstrofe «gaucho malo» que, si lo aplicara Alberdi a Sarmiento, corroboraría tan sólo, lo que no es un misterio para nadie, que Alberdi solía perder la serenidad en los momentos en que más necesitaba conservarla.

Jamás he reprochado al señor ministro de Hacienda sus lecturas. Cuando lo ha dicho en esta Cámara ha tergiversado mis palabras: le he reprochado sus contradicciones, no sus estudios. He lamentado en todo caso, que no haya sacado más provecho de sus estudios al no lograr una dirección mental segura que lo ponga a cubierto de rectificarse todos los días. Le he censurado su versatilidad y su propensión a la oratoria sofística.

No es la agilidad verbal para defender cualquier causa lo que interesa a la Nación en un ministro de Hacienda. No se trata en los debates financieros de discernir premios al mejor teorizador del pro y el contra. No se trata de que cualquier explicación sea buena, si es engañadora; se trata de que todas las explicaciones sean claras y sean honestas.

Se ha quejado de que yo le reproché haber dado una conferencia no remunerada para debatir puntos de ciencia financiera, en cuyo estudio habría envejecido. Jamás le he reprochado semejante cosa.

Dió una conferencia en el Centro de Estudios Superiores con fines entre políticos y financieros, para demostrar que el proyecto de Banco Central que incubaba el gobierno de facto conduciría a la inflación, y que era inoportuno, inútil e inconveniente. Dos meses después, con la misma erudición y con la misma suficiencia, dió otra conferencia, — llamaré conferencia a un discurso pronunciado en la Cámara de Diputados — para demostrar que los proyectos incubados por el gobierno de facto no conducían a la inflación y eran convenientes, útiles y recomendables.

Esa metamorfosis extraordinaria la explica en dos palabras; antes se trataba de expandir la circulación y ahora de contraerla. ¡Y el señor senador por Santa Fe no lo entiende, porque tiene una admirable capacidad para no entender!

Después agregó que si se le prueba que ha cambiado de opiniones, es una cosa baladí y sin importancia y que no se haría violencia en declarar que se ha rectificado una vez más. Frase que aclara perfectamente bien el sentido de la otra que quiso explicar en la Cámara de Diputados: «Me muevo en esas contradicciones como el pez en el agua».

Me parece inadmisibles y desagradable que un ministro de Hacienda de la Nación hable en el Congreso en ese lenguaje.

¿Qué pensar de sus opiniones actuales si se burla de las de ayer? ¿Qué seriedad pueden

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

tener? ¿Se puede legislar tranquilamente sobre la base de esa clase de opiniones ministeriales?

Admito que haya cambios de opiniones respetables. ¿Acaso no pueden existir?

Si el proyecto del Banco Central del gobierno de facto hubiera sido un proyecto inflacionista y el proyecto a que el señor ministro de Hacienda adhirió pocos días después, hubiera sido lo contrario, admitiría el cambio. Pero en este caso no es exacto. El señor ministro de Hacienda adhirió dos meses después al mismo proyecto que había considerado inaceptable dos meses antes, sin que se hubiera producido modificación alguna en los hechos que autorizara el cambio.

Y yo no estoy inventando, señor presidente: el mismo señor ministro de Hacienda, nos ha hecho la confidencia de su conversión, en un discurso en esta Cámara, que figura en la página 2.486 del Diario de Sesiones del 30 de Enero. Después de admirar la energía, decisión y coraje del Gobierno Provisional, demostrados en la creación de enormes impuestos el año 1931, y de llevar su entusiasmo hasta llamarlo «sin precedentes» en la historia financiera y fiscal de la República», opinión que no concuerda con la oposición tenaz que hacía desde su banca socialista a todos los impuestos nuevos, dijo lo siguiente:

«Y el mismo Gobierno Provisional, señor presidente, me hizo el honor de consultarme en esas circunstancias sobre el establecimiento de un Banco Central y sobre la posibilidad de realizar un plan que se me presentó ya articulado. Si yo hubiera tenido con respecto de hombres que eran mis adversarios políticos, las prevenciones imborrables que desgraciadamente existen a veces en los hombres públicos de la República, hubiera seguido creyendo que un proyecto que venía de esos hombres, de hombres que yo había combatido, de hombres que yo combatía, de hombres con quienes estaba enemistado políticamente, no obstante haber tenido una vieja y afectuosa amistad, tenía que ser malo y pernicioso y no podía prometer sino consecuencias desastrosas. Pero para mi bien o para mi mal, si algunas de mis opiniones cambian, cambio más fácilmente todavía el concepto que tengo de los gobernantes cuando los veo proceder de acuerdo a normas que me parecen acertadas; y respecto del presidente y ministros, con referencia a los cuales había dicho palabras tan enérgicas como las que me dictaba mi conciencia, cambié de opinión, me acer-

qué a examinar sus planes sin prevenciones ni recelos, los encontré bien concebidos, sinceramente inspirados, alentados por propósitos de bien público evidentes. Y me hice un honor y un deber endosando con mi firma la obra a cuyo coronamiento se me invitó a participar.»

Esto comprueba lo que acabo de decir: el ministro combatía por razones políticas al Gobierno Provisional y combatía también por razones políticas su proyecto de Banco Central. Y cuando las circunstancias cambiaron, cuando el general Uriburu se sometió a entregar el gobierno a los hombres de la Federación Nacional Democrática, a quienes había combatido en los primeros meses de su dictadura, cambiaron las ideas del señor ministro de Hacienda sobre los bancos centrales.

El señor ministro relata enternecido su conversión: «... me acerqué a examinar sus planes, sin prevenciones ni recelos, los encontré bien concebidos, sinceramente inspirados, alentados por propósitos de bien público evidentes. Y me hice un honor y un deber endosando con mi firma la obra a cuyo coronamiento se me invitó a participar.»

Y a raíz de la reconciliación, todos los autores que habían iluminado el panorama financiero del señor ministro, desde Walter Leet con su libro sobre la cultura del Irak, hasta el viejo Macleod y hasta la Revista del Midland Bank, fueron al canasto y adhirió fervorosamente al proyecto de Banco Central que el doctor Prebisch había preparado para el doctor Uriburu, y que él había considerado inconveniente e inútil.

¿Por qué ha dicho entonces, que se creaba un Banco para contener locuras, y no un Banco para la inflación, si adhirió al mismo proyecto que había combatido dos meses antes?

Sometamos a análisis las sutilezas de la argumentación del señor ministro de Hacienda. Dice: «Este Banco — no repito textualmente — obrará en favor de la contracción del circulante y no en favor de la inflación».

Para que una institución cualquiera pueda obrar en un sentido determinado, es necesario dotarla de los atributos que le permitan obrar en ese determinado sentido. ¿Se realizan en el proyecto del Banco Central condiciones tales que le permitan obrar en el sentido de la contracción del crédito con más energía que en el sentido de la inflación? No, señor presidente, absolutamente no. Sucede precisamente lo contrario.

Este proyecto sólo tiene dos resortes que pueden obrar en favor de la contracción del crédito.

to: primero, la suba del interés del redescuento, de influencia relativa; segundo, la venta de bonos del 3 %, que produciría un retiro de billetes, venta que requiere, como condición para realizarse, que haya quien compre.

La suba del interés del redescuento, no produciría entre nosotros los mismos efectos que en los mercados europeos, porque allí el redescuento está incorporado a las costumbres bancarias, y aquí no; aquí el redescuento es una especialidad de los bancos en situación delicada. Ninguno de los grandes bancos argentinos, no afectados por la crisis, ha redescotado en el Banco de la Nación, ni iría a redescotar mañana al Banco Central. De manera que lejos de producirse los efectos que el señor ministro espera, más bien podrá suceder que el Banco Central, banco de bancos, no tenga clientela, no tenga cosa alguna que hacer, o tenga poco que hacer, a menos que se dedique a fomentar el redescuento en los bancos puestos al amparo del Instituto Movilizador, o de los pequeños bancos afectos a cobrar intereses inmoderados.

En cambio, en favor de la inflación, ¿qué resortes jugarán en el Banco Central? La mar y todos sus pececillos.

Primero, los 5.800.000.000 que puede redescotar, eligiendo papeles de cualquier clase; segundo, los anticipos sobre valores nacionales por todo el capital y las reservas del Banco y por la parte amortizada de los bonos del 3 %; tercero, las compras de títulos.

Estoy seguro de que cuando empiecen a jugar esos resortes, prevalecerá la fuerza centrífuga, prevalecerá la inflación.

Es claro que mis observaciones tienen en vista lo que sucederá, si las personas encargadas de hacer marchar el peligroso mecanismo que crea este proyecto ponen en movimiento los resortes que conducen a la inflación. Ahora bien; no es fatal que eso suceda.

Se ha visto muchas veces leyes pésimas, aplicadas con discreción, que no han producido malos efectos y leyes excelentes cuyos fines han sido desvirtuados.

Yo sé que no importará gran cosa que la ley autorice teóricamente el redescuento de documentos de favor, si un directorio del Banco Central, prudente y bien inspirado, no permite que se expanda la circulación más allá de lo que exigen las verdaderas transacciones. Por eso es que el nombramiento de presidente del Banco tiene una importancia extraordinaria. Y el Poder Ejecutivo, con la complicidad del Congreso, ya ha pegado el manotón y lo nombrará a su paladar por siete años. Ya circulan

candidaturas que son propicias para todo, menos para tranquilizar a la opinión.

Estos aspectos han pasado desapercibidos para el señor ministro de Hacienda en sus extensas exposiciones, pero no han pasado desapercibidos para la banca de esta Capital, nacional y extranjera, aun cuando se haya dicho, equivocadamente, que aplaude los proyectos. Lo ha dicho el señor ministro, sin razón para decirlo. Lo ha dicho porque ha conseguido algunas opiniones ambiguas o de complacencia de banqueros que han temido las iras o las represalias de un ministro que otras veces los ha amenazado y que ha dado en su despacho, el espectáculo de agrias disputas, que en unos casos han trascendido a los círculos comerciales y en otros, a los círculos políticos.

Las demostraciones que acabo de resumir dan su verdadero carácter a este proyecto y su verdadero color a la evolución realizada por un ex teorizador de la moneda sana, paladín durante muchos años en la Cámara de Diputados, del poder adquisitivo de la moneda y de los salarios, en beneficio de las clases trabajadoras, hoy olvidadas.

No pudiendo negar la evolución, ni sus aspectos sorprendentes, trata de cohonestarla, atribuyendo a sus oponentes las mismas o parecidas contradicciones que a él se le reprochan, y a ese efecto, en su discurso ha dicho dos o tres veces que yo, en 1932, preparé un plan financiero sensacional y que en su contenido entraba una emisión de 200.000.000 para el gobierno.

Es innecesario decir que nada de eso es exacto. En 1932 yo no preparé plan alguno, y mucho menos sensacional, y no lo preparé porque no me había vuelto loco, pues, solamente habiendo perdido la razón me habría entretenido en preparar un plan que habría sido ipso facto desechado por una mayoría adversa y disciplinada. Si mi discurso sobre el presupuesto en 1932, despertó alguna sensación, según asegura el señor ministro, y yo lo ignoraba, no sería porque yo diera ningún carácter sensacional a una simple crítica de los procedimientos que se resucitaban después de la revolución para no hacer economías y que eran muy parecidos a los procedimientos que se habían usado antes de la revolución, y ahora puedo decir que han culminado en el presupuesto de 1935, que llega a 1.000.000.000 de pesos, con 120.000.000 de déficit.

En 1932 sucedió todo lo contrario de lo que ha dicho el señor ministro, y lo probaré leyendo el breve párrafo con que cerré mi exposi-

ción, meramente crítica, en la que estaba a mil leguas de proponerme ningún plan: «La responsabilidad de este presupuesto es de la mayoría; no es de la oposición. Yo estoy cumpliendo aquí, sin fe y sin ilusiones, un deber ingrato. He salido de un retiro tranquilo que deseaba definitivo, obligado por solidaridades indestructibles. Pero siento cada día más el cansancio y casi diría el hastío de la vida pública. Predico en el desierto para quedar en paz con mi conciencia. No me hago la ilusión ingenua de creer que mi palabra vaya a pesar en el resultado del debate, ni me propongo mover la opinión pública, ni mucho menos sueño con desviar de su camino a otros hombres conscientes de sus intenciones y de sus intereses.»

De alguna parte, sin embargo, ha sacado el señor ministro de Hacienda los elementos que le han servido para atribuirme lo que nunca hice. Diré de dónde los ha sacado: de la tergiversación de otro párrafo del mismo discurso, de la sesión del 13 de Mayo de 1932, que se encuentra en la página 407 del tomo I del mismo año, y que dice: «Por lo que respecta al partido que representamos en esta Cámara los senadores por Santa Fe, repito que no puede decirse que haya adoptado una actitud negativa. Haciendo violencia a nuestros principios, habríamos votado una emisión de 200.000.000 de pesos y la extracción de oro de la Caja de Conversión para dar recursos al Poder Ejecutivo, bajo dos condiciones: la rebaja del presupuesto y la rebaja de los efectivos militares.»

Eso es todo lo que dije, y ese sería, por consiguiente, el plan. Como ven los señores senadores, se trata de una concesión eventual y condicional que habríamos hecho los senadores demócratas progresistas en el caso en que el Senado hubiera aceptado nuestras dos condiciones: rebajar el presupuesto y rebajar los gastos militares. El señor ministro le suprime el carácter condicional y lo convierte en un plan sensacional. Si eso lo entretiene, ¿qué le vamos a hacer? (*Risas*).

Sr. Ministro de Hacienda. — Pronto se va a entretener usted, dentro de unos minutos.

Sr. de la Torre. — Me indujo, además, otra razón a adoptar aquella actitud y esa razón hace honor a la claridad con que vi la situación fiscal de 1932. Con la administración impaga más de cuatro meses y con escasez de crédito, era materialmente imposible que el Poder Ejecutivo pudiera eludir la emisión de billetes, que yo calculé en 200.000.000, y entonces, entre aceptar la emisión bajo el velo púdico del Empréstito Patriótico, sin tener la

ventaja de una reducción del presupuesto, o ir directamente, francamente, a la emisión, en cambio de esas dos condiciones, opté por el último procedimiento. Eso es todo.

Veamos ahora cómo votamos el uno y el otro en aquellas circunstancias.

Yo voté por la negativa y mi crítico, que ya entonces formaba parte de la mayoría y empezaba a dejar de formar parte del socialismo, votó porque se emitieran los títulos que se llevarían a la Caja de Conversión...

Sr. Ministro de Hacienda. — Es rigurosamente falso.

Sr. de la Torre. — ... y después, siendo ministro, repudió el pago del servicio de esos títulos que era para rescatarlos.

Con estas manifestaciones doy por terminada mi intervención, y repito lo que ya dije: se inmola el porvenir para holgura del presente; política vieja, que siguen sistemáticamente los países inorgánicos. Agotado el último centavo de los empréstitos de desbloqueo, se echa mano de la revaluación del oro para seguir afrontando y disimulando los déficit del presupuesto. Se incorpora, además, al engranaje de los recursos del Estado un impuesto a la exportación, porque no es otra cosa al margen de cambio, cuyo destino originario se dijo que era la protección de los agricultores. Se abren de par en par las puertas de un Banco de emisión, que podrá lanzar a la plaza 5.800.000.000 de billetes respaldados por papeles inconsistentes, se harán anticipos y se adquirirán títulos del Estado. ¡Nuestro gobierno tendrá cómo seguir viviendo alegremente!

Sr. Ministro de Hacienda. — Pido la palabra.

El discurso que acabamos de escuchar no tiene defensa posible, no tiene justificación ni por su tono ni por su forma, ni por su contenido, ni por la oportunidad. Pero le sobra explicación. Todo el que ha presenciado los últimos debates en esta Cámara y conoce al señor senador por Santa Fe, sabe que tenía que producirse la explosión que la Cámara ha oído. Sabía también todo el mundo que una exposición hecha en esta oportunidad, debía ser lo que ha sido: un paseo general por proyectos que no están en discusión y una colección esmerada de diatribas contra el ministro, perfectamente lógica en quien por mucho tiempo tendrá que seguir resollando por heridas que no se curan en 24 horas.

¿Quién no recuerda los antecedentes de este debate, como para que haga necesaria una relación circunstanciada del mismo? El señor

senador por Santa Fe se refirió de paso a la discusión sobre el presupuesto. Vale la pena tomar ese punto de partida.

Con motivo de la discusión del presupuesto, hizo el señor senador una exposición de varias horas lamentándose de la temperatura y examinando todos los aspectos de la vida pública argentina en los últimos tiempos y de la gestión del ministro en particular. Punto por punto, con una paciencia de benedictino, fué contestando cada uno de sus juicios, fué mostrando lo infundado de sus aseveraciones, lo pueril de sus previsiones, lo deleznable de su argumentación. Tengo todavía sobre mi mesa los borradores de ese discurso en que, párrafo por párrafo de las anotaciones sobre la exposición del señor senador, fué tachado, cuando se dió sobre los argumentos del contrario toda la explicación necesaria. Pero después del discurso mío, el señor senador por Santa Fe creyó del caso repetir en frío lo que nos había dicho con más precisión en caliente y me pareció que no tenía el derecho de ocupar la atención del Senado de mi país, contestándole nuevamente. Si la réplica no tuvo respuesta, tuvo, sin embargo, un efecto evidente. El no haber contestado el ministro, sugirió la idea clara que el ministro temía un debate con el terrible e invencible tribuno que desde hace veinte años es el terror de sus adversarios. Y a la primera ocasión que se le presentó al señor senador por Santa Fe volvió a la carga con renovados bríos.

¿Que el tema no era el mismo, que no había por ser distinta la materia, la misma exposición, qué importa eso? Se discutía el Banco Central y se volvió a hacer la argumentación general sobre toda la política fiscal y financiera del gobierno y se volvió a discutir más que los proyectos en sí, al ministro que los proyectó. Se le dijo que es al mismo tiempo terco hasta lo inconcebible y versátil hasta lo inverosímil, que es ignorante de cosas sencillas, pero que tiene el prurito de una erudición libresca descomunal. Se tomó de los proyectos, apenas una de las partes más exteriores: la organización del Banco Central, el nombramiento de autoridades; se pontificó sobre ello algo y se salpicó y se sancó todo eso con abundante materia agresiva para quien no estaba en ese momento en discusión. Pero pasó, señor presidente, una cosa que no estaba tampoco en el cálculo. Quien debía ser herido por esos mandobles de un sable de acero, recibió los golpes como si fueran dados por una espada de trapo.

Las palabras sin fundamento y sin fondo se

quebraron ante la actitud de un ministro que sabía lo que tenía por delante y tenía conocimiento pleno de lo que había redactado en colaboración con sus grandes funcionarios. Y pasó esta cosa estupenda, que quien intencionalmente había colocado el debate sobre un terreno personal, impropio de la majestad del Senado argentino, y violando toda ley parlamentaria, sintió que la reacción se producía en la forma más inesperada y la Cámara presenció entonces los movimientos nerviosos, la agitada expectación de quien creía que era inexplicable que no hubieran surtido efectos mortíferos los tiros disparados, hasta que por fin el campo fué abandonado. Quedó el ministro en situación de seguir exponiendo su punto de vista en la réplica a una exposición de carácter personal, sin la presencia del senador por Santa Fe en el recinto, quien no volvió aunque estaba en la casa durante toda la discusión del proyecto...

Sr. de la Torre. — Estaba en la Oficina de Taquígrafos corrigiendo mis pruebas.

Sr. Ministro de Hacienda. — Corrigiendo sus pruebas. Ese era, señor presidente, el momento de los desplantes airados. Era el momento de la crítica general, de las aseveraciones equivocadas, de los datos erróneos, de las apreciaciones sin fundamento que hubiera vertido el ministro en ese debate, todo lo cual debía haber tenido en ese momento la condigna respuesta. Pero es más fácil, señor presidente, para los que no son los gauchos malos de Sarmiento, pero sí los héroes ínelitos de la nueva época, adquirir esta nueva modalidad parlamentaria: se plantean los asuntos, se promueve el debate y luego se huye del recinto y dos meses después se trae, cuando ya nada lo justifica, las aseveraciones que no se emitieron en el momento oportuno!

Yo no puedo, señor presidente, abusar de la paciencia del Honorable Senado, tratando en general y en particular proyectos que ya no están a consideración de este cuerpo. Como bien lo dijo al fundar su moción de sobre tablas el señor senador por San Luis, hoy no se discute la ley del Banco Central; el Senado de la Nación lo que discute es si son mejores los preceptos que aquí se votaron o los que vienen en revisión de la Cámara de Diputados. No caben enmiendas ni cabe mejorar los proyectos. Sólo se puede elegir entre la sanción del Senado y lo que votó la Cámara de Diputados. La discusión debe versar sobre esos puntos y nada más, pero a pesar de esto, atento a lo que se ha afirmado, debo decir algunas cosas más y las diré.

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

Parece que ahora el señor senador por Santa Fe tiene la ventaja de poder hablar con conocimiento de causa, porque se ha destapado el enigma del juego de las compensaciones. Siguiendo la exposición del señor diputado Godfrid, el señor senador por Santa Fe dice: Habrá emisión, habrá inflación, luego son infundadas las aseveraciones del señor ministro; lo que ha faltado es la prueba de ello, y debo insistir en que parece que no se comprende lo que es una cosa muy sencilla. El valor del oro en el activo de un sistema bancario es un rubro, es un renglón de ese activo. El conjunto del activo balancea el conjunto del pasivo. Si el renglón del oro aumenta en magnitud de 1.000 millones de pesos a 2.000.000.000, puede resultar que se coloque del lado pasivo 1.000.000.000 más como poder de compra suplementario de la colectividad, en billetes o depósitos del público. Pero si el incremento del valor del oro es del lado activo, lo único que hace es neutralizar la disminución de rubros del mismo lado activo que no aumenta en su conjunto, no se produce inflación de ninguna especie, no aumenta el poder adquisitivo de la colectividad, representado por los billetes del público y por los depósitos.

Por más que el señor diputado Godfrid, en esa exposición luminosa, a la que no he respondido — porque otorgo, según el señor senador por Santa Fe, — haya dicho lo contrario, no se podrá demostrar que con la revaluación del oro, al castigar rubros del activo, se hace inflación.

Pero parece que también se ha descubierto que el gobierno va a aprovechar la revaluación en su propio beneficio. Es un descubrimiento reciente. Antes se decía que la revaluación del oro iba a aprovechar a la colectividad. Ahora se ha descubierto que es para el gobierno. Sin embargo, desde el primer momento se ha dicho que por lo menos 300.000.000 de letras de tesorería serían pagadas en esa forma.

Pero el señor senador por Santa Fe se empeña en decir ahora que recién se manifiesta eso. ¿Qué le vamos a hacer ante esas afirmaciones?

Parece que el gobierno se ha apartado fundamentalmente del proyecto Niemeyer y que se empeña en desvirtuarlo. Recuerdo haber dicho, señor presidente, que el gobierno se ha esforzado, dentro de lo posible, en concordar con las conclusiones del banquero Niemeyer, pero de ninguna manera pretende haberlo copiado servilmente y ha afirmado que reivindicaba para los poderes públicos argentinos el derecho de dictar una ley dentro de su facul-

tad legislativa con absoluta autonomía, coincidiendo o no coincidiendo con las opiniones del perito británico.

Contra las recomendaciones del señor Niemeyer — replico — este Banco Central va a convertirse en un Banco oficial porque el gobierno es accionista. Pero no se ha visto, o no se ha querido ver lo que dice la ley respecto al gobierno como accionista. El gobierno puede ser accionista, es cierto, pero el gobierno no puede influir en las decisiones del Banco, como accionista, porque no tiene voto en las asambleas de la sociedad. Categóricamente la ley lo dice: el gobierno es accionista a los efectos de no exigir a los bancos privados el aporte del capital en momentos en que conviene que no estén en la obligación de aportarlo. Pero ese aporte de capital no le da ninguna ingerencia, repito, en el manejo del Banco, como no sea la que tiene por otros artículos del proyecto, que se refieren al nombramiento del presidente y vicepresidente, por el procedimiento conocido.

Parece que hemos tergiversado también cuando dijimos que en eso seguimos las recomendaciones del perito Niemeyer. El texto que ha leído el señor senador por Santa Fe — creo que lo ha leído, no estoy absolutamente seguro — demuestra que el señor Niemeyer confiaba al Poder Ejecutivo el nombramiento del presidente, vicepresidente y todos los miembros del directorio de entre las personas propuestas por la comisión organizadora, que se compone, de eso sí estoy seguro, en la forma indicada por el señor senador por Santa Fe, con la mayoría de miembros nombrados por organismos oficiales.

El gobierno, para demostrar que no tiene ningún propósito megalómano, que no desea tener el dominio absoluto del Banco, admitió en el acto, en cuanto se lo propuso un correligionario del señor senador por Santa Fe, diputado Noble, que el directorio fuera nombrado desde el principio de acuerdo con la carta orgánica, y que sólo el presidente y vicepresidente fueran designados por el Poder Ejecutivo, por razones que se dieron sobradamente en nombre del gobierno.

En «The Economist», de Febrero 16 de 1935, que ha llegado hoy, encuentro un artículo sobre la reforma bancaria argentina, bastante bien hecho. Se examina allí el proyecto y se llega a la conclusión de que la propiedad atribuida al gobierno de parte de las acciones del Banco, significa un compromiso entre los partidarios y los oponentes de la propiedad del Estado y del control del Estado en los bancos centrales, y se hace justicia al carácter autónómico de la

institución y sobre su manejo independiente, fuera de la voluntad oficial.

Parece, señor presidente, que también hemos cometido gruesa herejía al establecer cuáles serán los papeles redescontables. El señor senador por Santa Fe dijo: es extraño que el señor ministro no sepa el alcance que tiene la calificación de papel elegible pero en seguida me hace justicia al decir que el proyecto del Poder Ejecutivo es igual al de Niemeyer, y que las modificaciones heréticas fueron introducidas por la comisión del Senado, luego por el Senado y más tarde por la Cámara de Diputados de la Nación.

¿Cómo no se percibe, decía el señor senador por Santa Fe, la diferencia que hay entre la solvencia y el empapelamiento? Papel absolutamente seguro puede servir para el empapelamiento. No fué de lo más demostrativo el ejemplo que dió, de que al señor Rotschild — citado por el señor senador por Mendoza — se le ocurriera empezar a dar documentos de favor. Eso es inverosímil, porque si comienza por darlos, alguna vez tendrá que pagarlos. Pero pongámonos en el caso eventual de que se da ese papel. Es evidente que el papel de favor puede permitir la inflación, pero ello no sucederá, porque ni el despacho de la comisión ni el del Senado autorizan el redescuento de esos papeles de favor.

Se ha cambiado a propósito el alcance de ciertos vocablos. El proyecto siguió en lo posible, como he dicho, la terminología del señor Niemeyer y por eso decía que solo eran redescontables los papeles con dos firmas provenientes de operaciones comerciales.

La Honorable Cámara ha cambiado esa disposición y establece que son redescontables los papeles relacionados con operaciones comerciales. No hay ninguna transformación de fondo y sí de forma, que obedece al propósito de acomodar la ley a la realidad argentina y no a doctrinas económicas, que se me imputa seguir con demasiada frecuencia.

El papel de dos firmas es escasísimo en el país argentino; casi se puede decir que es desconocido. No está en las prácticas comerciales de la República, y el escaso papel de dos firmas que había hace algunos años tiende a desaparecer por el juego de factores económicos y por circunstancias de otro orden que se pueden puntualizar. Las sucursales de los bancos desparramadas por todo el territorio del país, son un gran factor de decrecimiento del papel de dos firmas; el pequeño comerciante de campaña tenía, cuando no existían bancos en su localidad, la costumbre de hacerse adelantar di-

nero por los mayoristas con quienes estaba en relaciones y el mayorista hacía de banquero intermediario, aceptando su papel y llevándolo al banco. Cuando la sucursal del banco ha existido, el pequeño comerciante de campaña ha llegado a adquirir crédito en ese establecimiento y no necesita de la firma del corresponsal de la ciudad para acercarse a la fuente de dinero. Por otra parte, el gran comerciante se ha emancipado de la obligación que tenía de financiera al pequeño comerciante y, por costumbre, que se afianza por infinidad de motivos, se ha hecho en ellos un hábito no recurrir con el papel de sus clientes a los establecimientos de crédito. Ninguna gran casa de comercio, como los grandes almacenes, llevan hoy el papel de sus clientes rurales a los bancos, en procura de dinero. Hacen una cuestión de honor encarpitando esos documentos en sus escritorios o cajas de hierro, y llevan al banco papeles con su exclusiva firma, solicitando a esos establecimientos el dinero que necesitan, haciendo de esto una cuestión de legítimo orgullo.

Por eso, como estos documentos decrecen, como cada día hay menos papeles de dos firmas, un gobierno que vele un poco por el futuro, que piense en las necesidades monetarias del país como relativamente constantes, tiene que ponerse en los casos de redescuentos del papel que no sea de dos firmas. Si sólo estableciéramos el papel con dos firmas, en el estado actual de la plaza bien podría suceder que, transformado el sistema actual de redescuentos, en el redescuento del Banco Central, fuera menester una vigorosa contracción monetaria, por no existir papel de dos firmas que pudiera servir de respaldo a la emisión necesaria.

Esta verdad que parece que hoy he descubierta a los fines de esta controversia, está expuesta por mí en las conferencias que ha leído el señor senador, y está expuesta en momentos en que parecía herética.

Creo poder reivindicar para mí el honor de haber sido una de las primeras personas que ha escrito en este suelo sobre la inexistencia del papel comercial efectivo como respaldo de la circulación de moneda, en momentos que no sean de inflación creciente. Cítelo, recuerdo perfectamente, como opiniones concordantes, la de dos americanos: una, la del señor Eddie, que escribe en la «Revista de la Universidad de Chicago», y otra firmada Mint, en la misma revista. Son cosas que no he estudiado en un cuarto de hora, ni he prendido con alfileres, de manera que la observación al respecto es totalmente impertinente.

Siempre he previsto la posibilidad de que

el papel de dos firmas resultara escaso; que aun el papel de comercio resultara escaso. Ha sido necesario, por eso, señor presidente, admitir que se enmendara la plana del orgulloso ministro que trajo aquí su iniciativa, cambiando un precepto de su ley por otro más amoldado a las necesidades del país. El teórico, enamorado de ciertas concepciones dogmáticas, ha cedido al gobernante, ha preferido amoldar la legislación de su país a las necesidades corrientes.

Después que se habló y se escribió sobre estas cosas por las autoridades que cité y por el ministro que habla, antes de que esas autoridades publicaran los artículos a que he aludido, la verdad se ha hecho por demás evidente. La ley Glas-Steagall de Estados Unidos se dictó, precisamente, para permitir a la Reserva Federal poder disponer del oro que estaba garantizando billetes, permitiéndose que la emisión se garantizara con títulos del gobierno. No había en todos los bancos letras comerciales suficientes. Algunos bancos federales que no encontraban papeles elegibles para el redescuento, necesitaban garantizar con oro la emisión necesaria, con lo cual, por el sistema de los bancos federales, que no es uno sino doce, quedaba ligada, imposibilitada de moverse, una gran cantidad de oro. La ley se dictó para que hubiera mayor cantidad de oro disponible y no para que pudiera emitirse mayor cantidad de papel, permitiendo, como digo, que una parte del papel estuviera cubierta con títulos, ya que no había papel comercial.

Y después han venido reformas americanas mucho más radicales, que todo el mundo conoce. Se ha permitido el descuento de papel de una sola firma. Se ha permitido, también, que se acerquen a la Reserva Federal los particulares y las compañías, sin el intermediario de un banco. Y por fin, señores senadores, se ha permitido llevar a los bancos federales solicitudes de capital, no de crédito a corto plazo, sino solicitudes de capital hasta por el término de cinco años.

El gobierno no ha plegado sus convicciones ante el ejemplo americano. Se ha mantenido en lo que creyó siempre lo mejor, con la ligerísima variación de cambiar la terminología, refiriéndose, no a papel emergente de operaciones comerciales, sino a papel relacionado con operaciones comerciales. Con ello no se estableció un criterio distinto al antes adoptado. Nada impide a las autoridades bancarias excluir como mal papel, inaceptable, el que sea un mero papel de favor o financiero.

También he dicho en las conferencias que se han citado, que el papel de comercio no se distingue por su forma. Nosotros estamos acostumbrados a considerar como papel de redescuento ciertos documentos que no tienen nada de papel comercial y que no tienen nada de papel líquido. Un pagaré que se lleva por un particular cualquiera a un establecimiento bancario y que a su vencimiento, o se renueva con religiosa puntualidad o se cambia por un papel que se coloca en otro Banco cercano no tiene de papel de comercio sino su forma externa. Es papel de comercio porque está regido por el Código de Comercio como papel de comercio, pero no es el papel de comercio que prevén las leyes bancarias. De manera que, señor presidente, no nos paguemos mucho de la forma del papel y pensemos que la garantía del manejo escrupuloso de la moneda argentina estará, no en dos o tres palabritas agregadas a la definición del papel, sino en calificarla como papel que responda a operaciones reales y no a operaciones de favor o simple papel financiero.

Pero el señor senador por Santa Fe, con su dulce y amable benevolencia, que, sin duda, ha adquirido en sus largos años, después de obsequiarme con unos cuantos calificativos, ha dicho rotundamente: el señor ministro no sabe lo que dice. Para demostrarlo se ha empeñado en hacer desfilar ante la Cámara la silueta de un hombre que no voy a ser yo quien disminuya sus méritos, para atribuirle toda la obra realizada: el doctor Prebisch. Ya he hecho el elogio del doctor Prebisch sin que nadie me lo pida; sé todo lo que colabora en el gobierno, sé todo el interés que pone en el estudio y dilucidación de los asuntos públicos, pero, para su bien o para su mal, y para bien o para mal del país, por el momento el ministro responsable soy yo y debo cuidar un poco lo que hago, aún cuando estime en mucho la colaboración del doctor Prebisch. Las cosas que el doctor Prebisch escribe o dice no son endosadas por el ministro sin conocimiento de causa, como para que pueda resultar de ello en cualquier momento contradicción entre lo que el doctor Prebisch escribe con firma del ministro y lo que éste ha sostenido antes. Son cosas que el ministro sabe bastante bien. Por ejemplo, sabe bien lo que es la garantía y la posibilidad de emitir.

Límite de la emisión: ¡cinco mil ochocientos millones! ¡Qué espanto! ¡Y decir que el Congreso argentino ha votado este adefesio! ¡cinco mil ochocientos millones, y los pide el ministro que ha declarado en publicaciones conocidas que creía que no era necesario más papel! Es que

debe haber andado por allí la mano diabólica del doctor Prebisch, haciéndole pasar de contrabando algún artículo que él no ha querido. Y vienen, entonces, en apoyo de esta afirmación, los cálculos esmerados del señor diputado Godfrid.

Señor presidente: la exigencia de una garantía y la posibilidad de emisión no son cosas muy fáciles de diferenciar. Si hoy hay 100 de oro y hay 100 de papel y la garantía legal es de 25 %, es evidente que se puede emitir 400, pero esa elasticidad no es sólo para poder emitir 400; es para poder mantener 100 en circulación, si el oro desciende a 25. Algunos nunca se ponen en el caso de que la elasticidad no esté establecida para poder ampliar la emisión, sino para poder disponer del oro. Son los cálculos que dejó de hacer el señor diputado Godfrid y que no ha tenido la precaución de elaborarlos por su cuenta el señor senador por Santa Fe. Si lo hubiera tenido en cuenta y si hubiera leído con buena voluntad lo que dije — porque sin buena voluntad no es posible entender lo que dicen los contrarios — habría percibido con nitidez que todo lo que se dice en el mensaje, en el proyecto, en el discurso y en los discursos anteriores, está inspirado por la misma idea: la elasticidad se necesita, no para poder emitir más papel, sino para disponer de más oro. Y el mismo artículo de «The Economist» a que me referí hace un momento, en el estudio sobre la reforma bancaria argentina, dice esto, por ejemplo: «Siguiendo las recomendaciones de la Delegación del Oro de la Liga de las Naciones, la reserva legal del Banco Central se ha fijado en 25 %, pero se arguye que la reserva de oro debe normalmente estar muy por arriba de ese límite. Superficialmente, eso parece que es un alejamiento de la relación de oro más elástica, recomendada por la Liga de las Naciones y apoyada por las opiniones modernas sobre Banco Central, pero las circunstancias de la República Argentina deben ser recordadas». Pido perdón por la forma de leer este párrafo, porque estoy traduciendo del inglés.

Las circunstancias de la República Argentina a que se alude, son precisamente las que se exponen en los fundamentos y las que se han expresado en los debates parlamentarios: que un país como éste puede tener necesidad de mover grandes cantidades de oro y que si por la ley no se le permite sino una relación fija entre el oro y el papel, la salida del oro tiene que conducir a una disminución del papel que puede ser perjudicial. Agregué en la

Cámara de Diputados días pasados, lo que será difícil de encontrar en los libros comunes, pero que es rigurosamente exacto, que quien se empeña en someter la moneda de un país a reglas inflexibles, imponiendo la restricción de la circulación cada vez que tiene que salir oro, lo que determina con ello es el quebrantamiento de esa ley.

En cuanto se produce una circunstancia de ese orden, el hilo se corta por lo más delgado. De manera que si la República desea conservar el sistema monetario que se está considerando, lo que necesita es dejar la elasticidad que la ley prevé.

La revaluación del oro, dice el señor senador por Santa Fe, en el proyecto de Niemeyer se utilizaba para pagar la deuda que no gana interés, y que es la emisión sin garantía. No se le puede achacar a Niemeyer ese propósito. Si la utilidad que se obtuviera de la revaluación del oro fuera para tener el placer de tener una cobertura de 300 % en lugar de 100 % del papel circulante, el despropósito estaría a la vista. Se refiere a la deuda que tiene el gobierno con el Banco, originada en causas diversas que todo el mundo conoce y esa deuda del gobierno para con el Banco, es lo primero que se va a cancelar en virtud de la revaluación del oro.

¡Ah!, pero resulta que esto es muy peligroso, porque quién sabe qué gobiernos vendrán después! Como los cálculos políticos del ministro de Hacienda suelen fallar, existe el gran peligro, si vinieran luego gobiernos de «negros o trogloditas», de que pueda lanzarse el país a una aventura emisionista que el señor senador por Santa Fe debe cuidar que no se produzca.

Y sin que vengan gobiernos de trogloditas, el peligro no ha dejado de ser grande. Recuérdese que el señor senador por Santa Fe ha proyectado la emisión de 3.000.000.000 de pesos para rescatar toda la deuda pública y todas las cédulas hipotecarias, con el objeto de lanzar después iguales títulos al 4 %, fundándose en que luego se retirarían. Es esa una aberración teórica, conocida desde la escuela primaria: el papel que se pone en la circulación se amolda a las necesidades y no es su retiro ulterior lo que le devuelve la salud. De haberse cumplido esos propósitos, que no eran de trogloditas sino de un senador mal informado, el país hubiera corrido peligros muy grandes de orden emisionista. Y fué precisamente en la oportunidad que esos proyectos aparecieron, y antes, cuando se presentó la tímida iniciativa del año 1932, que el ministro que habla comprendió que era imprescindible ir al sistema del Banco Central.

El señor senador por Santa Fe hizo algún gracejo, que no es su fuerte, alrededor del proyecto emisionista que se le ha atribuido, y decía que debía de haber sido tomado de algún párrafo mal interpretado de un discurso suyo del año 1932, pronunciado en el Senado. Pero no es así. El proyecto de emisión del señor senador por Santa Fe apareció antes de que se discutiera en esta Cámara el presupuesto de gastos y las materias a que él ha aludido. En un artículo aparecido en «La Nación» el 1º de Abril de 1932 y día siguiente, es donde se admitió una emisión directa limitada a 200.000.000 de pesos como una necesidad suprema y se previó también la facultad de tomar oro de la Caja de Conversión, gratuitamente, para el servicio de la deuda pública.

Cuando esos proyectos andaban en el espacio, cuando todas las iniciativas para salvar las dificultades del tesoro llevaban abiertamente, en derecho, a la emisión y a la Caja de Conversión, el ministro que habla, que había combatido el principio del Banco Central, cuando supuso que era posible mantener la Caja de Conversión, cambió de opinión y lo dijo. El señor senador no ha descubierto aquí mi contradicción, porque fui yo quien lo dije en la Cámara de Diputados el año 1932, recordando que, como principio, había sostenido la posibilidad de que el país viviera bajo el régimen de la Caja de Conversión, pero que cuando ya existían todos los elementos que puede calificarse de inflacionistas de un Banco Central, lo que correspondía era crearlo, para que existieran también los frenos y elementos necesarios de absorción.

Pero viene una consideración política un tanto cómica. Resulta que el ministro actual combatió los proyectos del Banco Central del gobierno de Uriburu, por motivos políticos y que cuando esos motivos políticos desaparecieron, cambió también su opinión sobre el Banco Central. Nada más inexacto. Los proyectos, en conjunto, sobre Banco Central fueron redactados por una comisión, de la cual yo formaba parte. Durante el gobierno de Uriburu se elaboró una idea sobre Banco Central; había un plan articulado en sus líneas generales sobre el Banco Central, destinado a pagar con la revaluación del oro la deuda con el Banco de la Nación, que entonces era lo más apremiante, sin emisión de ninguna naturaleza y para sacar el mecanismo monetario de las manos del gobierno, en vista de los peligros que corría. Cuando ese proyecto se articuló después de un gran esfuerzo fiscal y de ordenamiento financiero, como lo he referido días

pasados, el ministro actual se hizo una obligación en prestarle su aprobación y colaborar en ese trabajo.

Los antecedentes políticos, si se recuerdan, no van a hacer llevar más agua al molino del señor senador por Santa Fe. El ministro actual fué amigo del general Uriburu hasta antes de la revolución; colaboró el día de la revolución, fué contrario al general Uriburu en la plenitud de su poder y no fué contrario al general Uriburu cuando éste llegaba al final de su gobierno. Yo desafío a que otros digan que fueron adversarios del general Uriburu durante su impotencia y que fueron sus amigos el día de su caída.

Que estos proyectos no cuentan con la aprobación de los bancos. ¿Por qué se dice eso? Hemos tenido a todos los bancos reunidos, todos los bancos han expresado primero verbalmente y luego por escrito su aquiescencia a estos proyectos. ¿Tendrá alguna antena especial el señor senador para captar esas manifestaciones de opinión bancaria, como tiene para captar la opinión de toda la República que el gobierno no ha oído?

El gobierno ha tenido que organizar un sistema financiero sobre la base de un Banco Central que pueda proporcionar a los bancos del país una fuente de recursos a la cual se puedan acercar como fuente propia en los momentos de necesidad. Ha tenido que ordenar el sistema monetario de la República, hoy híbrido, amorfo, inconexo, de acuerdo al cartabón mundial en esta materia, y ha proyectado una ley de bancos que somete los organismos de crédito a reglas que hasta hoy todo el mundo ha reclamado. Ha previsto que para eso, era necesario colocar en una situación líquida la colectividad bancaria y prescindiendo de su interés fiscal, ha articulado un proyecto que le permita dedicarle buena parte de recursos, que de lo contrario le corresponderían por entero. Todo eso lo ha hecho, señor presidente, pensando en el futuro del país sin recelos y sin temores. No sé qué porvenir le depara el destino a nuestra patria. Estoy seguro de que hay un conjunto de hombres dispuestos a asegurar que ese porvenir sea venturoso, salvándolo de los excesos de la anarquía y de la acción infecunda de los que sólo han criticado.

Pero si el destino nos depara otra suerte, pasaría este gobierno como ejemplo de lo que puede hacer en beneficio de la República un conjunto de hombres, que no temió arrostrar dictérios que la pasión engendra cuando se

proponen servir los altos y permanentes intereses de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*).

—Ocupa la Presidencia el vicepresidente provisorio del Senado, señor senador doctor Carlos A. Bruchmann.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Se van a votar los artículos modificados por la Cámara de Diputados. El voto por la afirmativa expresará que el Senado acepta las modificaciones introducidas por la otra Cámara.

—Se lee:

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

Banco Central de la República Argentina

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Creación y objeto del Banco Central

Artículo 1º — Créase el Banco Central de la República Argentina por el término de cuarenta años.

Art. 2º — El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Podrá establecer sucursales o agencias o nombrar corresponsales por resolución de su directorio.

Art. 3º — El Banco tendrá por objeto:

- Concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de la fluctuación en las exportaciones y las inversiones de capitales extranjeros, sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales, a fin de mantener el valor de la moneda;
- Regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, adaptándolos al volumen real de los negocios;
- Promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario; y aplicar las disposiciones de inspección, verificación y régimen de los bancos establecidas en la ley de bancos;
- Actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las operaciones de crédito externo o interno y en la emisión y atención de los empréstitos públicos.

Capital y subscripción de acciones

Art. 4º — El capital originario del Banco será de 30.000.000 de pesos moneda nacional, dividido en 30.000 acciones de 1.000 pesos moneda nacional cada una.

Las acciones serán nominales y estarán registradas en el mismo Banco, y solamente podrán transferirse con el consentimiento de éste, sin que pueda exigirsele que exprese las razones que tiene para denegar cualquier transferencia. En caso de negarse una transferencia el tenedor podrá exigir que el Banco compre las acciones al valor nominal, reduciendo correlativamente el capital.

Art. 5º — Al constituirse el Banco Central, el gobierno nacional subscribirá 10.000.000 de pesos moneda nacional de acciones. Los bancos nacionales y extranjeros establecidos en la Argentina, que tengan un capital

subscripto no inferior a 1.000.000 de pesos moneda nacional deberán subscribir a la par una cantidad de acciones proporcional a su capital realizado, hasta completar la suma de 10.000.000 de pesos moneda nacional.

Ningún Banco, institución o persona podrá ser accionista por un valor nominal superior a la quinta parte del capital subscripto por los bancos.

Art. 6º — Los 10.000.000 de pesos moneda nacional del capital que no se subscriben en el momento de la organización del Banco, quedarán a disposición de éste para ser subscritos de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente

Art. 7º — Los bancos que se establezcan en la Argentina y que tengan un capital no inferior a 1.000.000 de pesos moneda nacional, o que aumenten su capital hasta un mínimo de 1.000.000 de pesos moneda nacional, y los bancos accionistas que aumenten su capital, podrán ser requeridos por el Banco Central para subscribir acciones al precio que fije el directorio, a la par o arriba de ella, teniendo en cuenta las reservas acumuladas, y en la misma proporción que la adoptada para la subscripción originaria. El Banco Central queda autorizado para aumentar su capital con este objeto en caso de no ser suficientes los 10.000.000 de pesos moneda nacional destinados a este fin en el artículo 6º, siempre que el gobierno no resuelva vender sus acciones para permitir la subscripción susodicha, o si posteriormente a esta venta lo juzgara conveniente por las razones expresadas en el presente artículo.

Art. 8º — Las acciones del Banco no podrán ser dadas en garantía de préstamo o con otros fines, salvo en casos especiales, y sólo con el consentimiento previo y escrito del Banco Central. El presente artículo deberá transcribirse en el dorso de cada acción.

Directorio

Art. 9º — El Banco tendrá un directorio compuesto de un presidente, un vicepresidente y doce directores.

Art. 10. — El presidente y el vicepresidente serán argentinos y personas de reconocida experiencia bancaria y financiera, y serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado dentro de las ternas elegidas por la Asamblea de Bancos Accionistas. Durarán siete años en sus funciones y podrán ser reelectos.

El presidente y el vicepresidente deberán dedicar todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco, y mientras estén en ejercicio no podrán ocupar otro cargo, remunerado o no.

Tendrán derecho a percibir los sueldos o asignaciones que el directorio determine periódicamente, con la confirmación de la Asamblea de los Bancos Accionistas; pero en ningún caso podrán ser remunerados total o parcialmente, bajo forma alguna de comisión, ni los sueldos o asignaciones que les sean pagados podrán determinarse en relación a las utilidades del Banco.

El presidente y vicepresidente del Banco Central sólo podrán ser separados de sus cargos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, conforme al procedimiento establecido para el juicio político.

Art. 11. — Si el presidente o el vicepresidente falleciera o renunciara o en alguna otra forma dejara vacante el cargo antes de cumplirse el período para el cual fué designado, se nombrará a otra persona en la forma establecida en el artículo 10 para ejercer dicho cargo durante el resto del período.

Art. 12. — De los doce directores, uno será elegido por el Poder Ejecutivo; uno por el Banco de la Nación Argentina; seis por los sectores en que se dividirá al

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

efecto la Asamblea de los Bancos Accionistas en la siguiente forma: uno por los representantes del Banco de la Provincia de Buenos Aires y demás bancos provinciales o mixtos del país que fueran accionistas, tres por los representantes de los bancos nacionales y dos por los representantes de los bancos extranjeros; y cuatro elegidos por toda la Asamblea de Bancos Accionistas — a propuesta del directorio y previa consulta de éste con entidades representativas, — entre personas de reconocida experiencia, capacidad y prestigio que deberán ser: un agricultor, un ganadero, un comerciante y un industrial. Ninguna de estas cuatro personas podrá ser director o empleado de Banco. Tampoco podrán formar parte del directorio simultáneamente más de tres extranjeros.

Art. 13. — Los directores elegidos de acuerdo con el artículo 12, durarán tres años en su cargo y podrán ser reelectos, excepto los nombrados por los bancos extranjeros que no podrán serlo sino con intervalo de un período.

Los directores elegidos por los bancos extranjeros serán de diferente nacionalidad, y los bancos de donde proviniesen no podrán ser de un mismo país de origen.

Art. 14. — Si algún miembro del directorio, con excepción del presidente o vicepresidente, falleciese o renunciase o en alguna otra forma dejase vacante su cargo antes de terminar el período para el cual fué designado, se procederá a elegir a otro director en la forma establecida en el artículo 12 para completar el período.

Art. 15. — No podrán ser elegidos ni continuar como miembros del directorio.

- a) Los empleados o funcionarios de cualquier repartición del gobierno, salvo el primer director a que se refiere el artículo 12, que podrá ser funcionario nacional, y el siguiente que podrá ser funcionario del Banco en cuestión; y los que tuviesen otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier otra forma que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos federal, provinciales o municipales;
- b) Los insolventes, y deudores morosos de cualquiera de los bancos accionistas;
- c) Las personas que hubiesen sido condenadas por delitos comunes.

Art. 16. — Los miembros del directorio actuarán en forma honoraria excepto en el caso previsto en el artículo 18.

Art. 17. — El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, ejercerá en representación del directorio la dirección del Banco, y estará autorizado para actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados a la decisión de la Asamblea de Bancos Accionistas; será al mismo tiempo el representante legal del Banco en todas sus relaciones con terceros.

Art. 18. — El presidente, si juzgara conveniente, podrá constituir una comisión consultiva formada por el vicepresidente y dos directores designados por el directorio por un año y reelegibles, de los cuales por lo menos uno deberá ser banquero. La comisión consultiva se reunirá por lo menos una vez por semana. El directorio podrá fijar una remuneración para esos dos directores que deberá ser confirmada por la Asamblea de Bancos Accionistas.

Art. 19. — El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, convocará a las reuniones del directorio cuando lo juzgue conveniente, y por lo menos una vez cada quince días. Si siete miembros formarán quórum, y salvo disposición contraria, las resoluciones serán adoptadas por

simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente o en su caso el vicepresidente, tendrá doble voto.

Art. 20. — El directorio ejercerá superintendencia de las operaciones del Banco, y sus atribuciones y deberes serán principalmente los siguientes:

- a) Intervenir en la reglamentación y administración del Banco, aprobar el presupuesto anual de sueldos y gastos, y nombrar, promover y separar de sus puestos a los empleados;
- b) Establecer y clausurar sucursales y agencias;
- c) Nombrar corresponsales en el país y en el extranjero, reglamentando sus relaciones con el Banco;
- d) Fijar las condiciones generales y los límites de las distintas operaciones autorizadas por esta ley;
- e) Fijar tasas de redescuento e interés;
- f) Adquirir los inmuebles necesarios para las operaciones del Banco y enajenar los inmuebles adquiridos, de acuerdo con el artículo 34, inciso h);
- g) Revisar periódicamente, por lo menos una vez cada seis meses, todos los redescuentos y adelantos;
- h) Aprobar las renovaciones y substituciones de letras de cambio y pagarés, de acuerdo con el artículo 34, inciso i);
- i) Resolver sobre la transferencia o caución de acciones del Banco de acuerdo con los artículos 42 y 8º;
- j) Nombrar la comisión consultiva cuando lo solicitase el presidente;
- k) Nombrar la o las comisiones de redescuento;
- l) Redactar la memoria anual y presentar el balance y cuenta de ganancias y pérdidas a la Asamblea de Bancos Accionistas.

Asambleas de Bancos accionistas

Art. 21. — La asamblea ordinaria de bancos accionistas que será convocada por el directorio una vez cada año, se efectuará dentro de los primeros tres meses del ejercicio financiero.

Tres semanas antes de la fecha fijada para la asamblea ordinaria se enviará una citación a cada Banco accionista con el orden del día y el detalle de los asuntos a tratarse.

Toda moción que los accionistas deseen someter a la asamblea deberá comunicarse al directorio dentro del mes siguiente a la terminación del ejercicio financiero y acompañarse con una exposición de los motivos en que se funda.

Art. 22. — Las asambleas extraordinarias de bancos accionistas se convocarán con dos semanas de anticipación por lo menos, cuando el directorio lo estime conveniente, o cuando lo requiera por escrito un número de bancos accionistas que represente por lo menos una tercera parte de los votos, de acuerdo con el artículo 23.

Estas peticiones deberán exponer siempre las razones que las motivan con indicación de las mociones que serán sometidas a la asamblea.

Las asambleas extraordinarias que convoque el directorio a pedido de los bancos accionistas, se efectuarán dentro de los 30 días de recibida la petición correspondiente por el directorio.

Art. 23. — Las asambleas serán presididas por el presidente, en su ausencia por el vicepresidente, y en ausencia de éste por el síndico.

Cada acción tiene un voto; pero ningún accionista podrá reunir un número de votos que constituya más

de la décima parte del capital subscrito por los bancos.

La misma persona no podrá representar más de un Banco accionista en las asambleas.

Art. 24. — Son atribuciones de la asamblea de bancos accionistas:

- a) Discutir, aprobar o modificar las cuentas anuales y la memoria del directorio;
- b) Resolver sobre la distribución de las sumas que se asignarán al fondo de reserva general y al fondo de reserva especial si se dispone crearlo;
- c) Resolver el reparto del dividendo anual;
- d) Elegir las ternas de candidatos para presidente y vicepresidente que deben ser presentadas al Poder Ejecutivo y elegir los directores a que se refiere el artículo 12;
- e) Resolver sobre los sueldos y asignaciones del presidente, vicepresidente y los dos miembros del directorio que integran la comisión constitutiva;
- f) Deliberar sobre todo otro asunto incluido en el orden del día;
- g) Fijar la remuneración del síndico.

Todas las resoluciones de las asambleas, salvo disposición contraria, serán adoptadas por simple mayoría de votos.

Comisiones de redescuento

Art. 25. — El directorio nombrará una comisión de redescuento para la Casa Central, y en caso necesario para cualquier sucursal del Banco, encargada de examinar todos los documentos presentados para su redescuento, adquisición o a título de garantía de adelantos. El número de personas que formará cada comisión será fijado por el directorio.

Art. 26. — Los miembros de las comisiones de redescuento serán personas conocedoras de las condiciones, financieras, comerciales, industriales o agropecuarias del país. Serán nombrados por un período de dos años y no podrán ser reelectos más de la mitad de sus miembros.

Cuando se proceda por primera vez a la designación de los integrantes de alguna comisión de redescuento, la mitad de los miembros será nombrada por un período de un año. No podrán ser miembros de las comisiones de redescuento, los miembros del directorio, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, socios o agentes, ni las personas que se encuentren comprendidas en las disposiciones del artículo 15.

Art. 27. — El cargo de miembro de las comisiones de redescuento será honorario, pero el directorio podrá autorizar el reembolso de los gastos incurridos por dichos miembros en el desempeño de sus funciones.

Art. 28. — Las deliberaciones de las comisiones de redescuento serán secretas.

Ningún miembro de una comisión de redescuento expresará opiniones ni votará respecto de letras o documentos en los cuales tuviere algún interés; y deberá retirarse de la sesión mientras tales letras o documentos estuvieran en consideración.

Art. 29. — La Comisión de Redescuento de la Casa Central será presidida por el funcionario que designe el directorio. En las sucursales, las reuniones de la Comisión de Redescuento serán presididas por el gerente de la sucursal.

El directorio del Banco determinará el número para formar quórum.

Art. 30. — Las resoluciones que aprueban o rechazan letras u otros documentos serán adoptadas por simple mayoría de votos, y en caso de empate el presidente de la comisión tendrá doble voto.

Art. 31. — El Banco no estará obligado a descontar letras o aceptar valores aprobados por la Comisión de Redescuento. Las letras u otros valores que hubiesen sido rechazados por la Comisión de Redescuento podrán ser aceptados por el Banco, siempre que sean aprobados por el directorio, con el voto de siete directores.

Operaciones del Banco

Art. 32. — El Banco podrá, en las condiciones que fije el directorio:

- a) Emitir billetes de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
- b) Comprar y vender oro;
- c) Recibir dinero en depósito en cuenta corriente, que no devengue interés;
- d) Redescantar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, documentos provenientes de operaciones comerciales relacionadas con la negociación de mercaderías, que lleven por lo menos dos firmas solventes, de las cuales una sea bancaria, vengzan a más tardar dentro de los 90 días a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio; o adquirir dichos documentos. Cuando se trate de documentos que reúnan las condiciones anteriores pero tengan tres o más firmas solventes de las cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de redescuento será inferior al aplicado en el caso precedente de este inciso;
- e) Redescantar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, documentos provenientes de operaciones relacionadas con la producción, elaboración o negociación de productos agropecuarios o industriales, que lleven por lo menos dos firmas, de las cuales una sea bancaria, vengzan a más tardar dentro de los 180 días a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio; o adquirir dichos documentos. Cuando se trate de documentos que reúnan las condiciones anteriores pero vengzan en un plazo máximo de 90 días a contar de la fecha de su redescuento o lleven por lo menos tres firmas solventes, de las cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de redescuento será inferior al aplicado en el caso precedente de este inciso;
- f) Acordar adelantos a los bancos accionistas, por un plazo fijo que no podrá exceder de 90 días, cobrándoles una tasa de interés superior en un punto por lo menos a la tasa oficial mínima del Banco Central para el redescuento de documentos a 90 días vista, sobre los siguientes valores:

1º Letras de cambio y pagarés que reúnan las condiciones establecidas en los incisos d) o e) de este artículo, y hasta la concurrencia del 80 % de su valor nominal;

2º Valores del gobierno nacional cotizados en el mercado, siempre que el importe del adelanto no exceda del 80 % de la cotización en la Bolsa de dichos valores y que el total

de tales adelantos conjuntamente con los valores nacionales de propiedad del Banco, (excluidos los bonos consolidados del tesoro nacional) no supere el límite a que se refiere el artículo 34, inciso b);

- g) Acordar adelantos sobre oro amonedado o en barras hasta el 95 % de su valor;
- h) Comprar y vender divisas o cambio extranjero;
- i) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales o del Banco Internacional de Ajustes, o de otra entidad que pueda formarse con propósitos análogos de cooperación internacional;
- j) Encargarse de la emisión, compra y venta de valores del gobierno nacional, por cuenta exclusiva de éste; y sin que el Banco pueda subscribir tales valores ni garantizar su colocación;
- k) Administrar la Cámara Compensadora en Buenos Aires y en otras plazas;
- l) Vender a los otros bancos o volver a comprar de los mismos los bonos consolidados del tesoro nacional, recibidos o adquiridos por el Banco en virtud del artículo 7º, de la ley de organización y los valores nacionales adquiridos de acuerdo con el artículo 34, inciso b), última parte.

Art. 33. — El Banco publicará en forma permanente las tasas de redescuentos y adelantos. Bajo ningún concepto efectuará redescuentos o adelantos a tasas menores que las fijadas.

Art. 34. — Queda prohibido al Banco:

- a) Emitir billetes de denominación de cinco pesos moneda nacional y menores;
- b) Conceder préstamos al gobierno nacional, ya sea en forma de redescuentos, descuentos, adelantos, créditos en descubierto, compra de letras de tesorería, títulos u otros valores del mismo, o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de:

- 1º Las operaciones autorizadas en los artículos 32, inciso f), ítem 2 y 44;
- 2º La adquisición de valores nacionales, que en ningún caso podrá exceder del monto del capital del Banco, sus reservas y el importe amortizado de los bonos consolidados del tesoro nacional recibidos o adquiridos por el Banco en virtud del artículo 7º de la ley de organización;
- 3º El redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales y de servicios públicos, que pertenezcan total o parcialmente a la Nación, siempre que los documentos reúnan las condiciones establecidas en el artículo 32, incisos d) o e) y que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente del de la Nación;

- c) Conceder en circunstancia alguna, a las provincias, municipalidades o reparticiones autónomas dependientes de las mismas, préstamos directos o indirectos en la forma de redescuentos, descuentos, adelantos, créditos en descubierto, o compra de letras, valores o títulos o en cualquiera otra forma, sin perjuicio del redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales y de servicios públicos, que pertenezcan total o parcialmente a las provincias o municipalidades, siempre que los documentos reúnan las condiciones establecidas en el artículo

lo 32, incisos d) o e) y que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente del de las provincias o municipalidades;

- d) Garantizar o endosar letras u otras obligaciones del gobierno nacional, provincias, municipalidades, reparticiones autónomas o instituciones similares;
- e) Participar directa o indirectamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;
- f) Comprar acciones, salvo las del propio Banco en el caso del artículo 4º y las del Banco Internacional de Ajustes o de otra entidad que pueda fundarse con propósitos análogos de cooperación internacional; o conceder préstamos con la garantía de acciones de cualquier índole;
- g) Conceder adelantos sin garantías u otorgar créditos en descubierto; salvo en el caso de convenios de créditos recíprocos concertados con otros bancos centrales;
- h) Comprar bienes raíces, salvo los que fuesen necesarios para que el Banco pueda desenvolver sus actividades; comprar mercaderías; y conceder adelantos que tuviesen por garantía bienes raíces o hipotecas. Si en la opinión del directorio corriera peligro algún crédito concedido por el Banco, éste podrá tomar las medidas necesarias para asegurar sus derechos sobre los bienes raíces o mercaderías del deudor, y podrá adquirir tales bienes raíces o mercaderías, pero estará obligado a revenderlos tan pronto como le sea posible;
- i) Conceder la renovación o sustitución de letras de cambio o pagarés vencidos, redescontados o recibidos en garantía por el Banco, salvo en casos excepcionales, en los cuales el directorio podrá autorizar por una sola vez su renovación o sustitución, y por un período que no exceda de 90 días.

Emisión de billetes y garantía metálica

Art. 35. — Durante todo el período para el cual ha sido constituido, el Banco tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la República Argentina, excepto la moneda subsidiaria a que se refiere el artículo 4º de la ley de organización; y ni el gobierno nacional, ni los gobiernos de las provincias, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes u otros documentos que fuesen susceptibles de circular como papel moneda.

Art. 36. — El Banco se hará cargo de todos los billetes de denominaciones superiores a cinco pesos moneda nacional ya emitidos por la Caja de Conversión y los reemplazará por una emisión nueva de billetes del Banco Central.

La emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria de denominaciones de cinco pesos e inferiores (inclusive las monedas de níquel y cobre) a cargo del gobierno nacional, se hará exclusivamente a solicitud y por intermedio del Banco Central, conforme a las necesidades del público; pero en ningún caso podrá exceder de 20 pesos moneda nacional por habitante, de acuerdo con los cálculos anuales de la Dirección General de Estadística de la Nación.

La mitad de la emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria será efectuada mediante el simple canje de una cantidad igual de billetes del Banco Central, cancelándose en forma simultánea una parte equivalente del bono sin interés a que se refiere el artículo 4º de

la ley de organización; la otra mitad se entregará directamente y sin canje alguno al tesoro nacional previa deducción del costo de la operación. Una vez cancelado totalmente dicho bono, toda emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria se entregará directamente y sin canje alguno al tesoro nacional y a su exclusivo costo.

Art. 37. — Los billetes serán de las denominaciones superiores a cinco pesos que fije el directorio.

Art. 38. — Los billetes del Banco tendrán curso legal en todo el territorio de la República Argentina por el importe expresado en los mismos.

Art. 39. — El Banco mantendrá en todo momento una reserva suficiente para asegurar el valor del peso, ya sea en oro, divisas o cambio extranjero, equivalente al 25 % como mínimo de sus billetes en circulación y obligaciones a la vista.

El oro y las divisas o cambio extranjero deberán hallarse libres de todo gravamen y pertenecer en propiedad al Banco sin restricción alguna; y de las divisas o cambio extranjero sólo se incluirá en la reserva el saldo neto, o sea el remanente libre después de deducidas todas las obligaciones en oro y divisas o cambio extranjero.

Si en un ejercicio determinado, la reserva en relación a los billetes y obligaciones a la vista hubiera sido inferior al 33 % durante 60 días seguidos o 90 días en el total del ejercicio, no se abonará dividendos a los bancos accionistas y los beneficios correspondientes serán destinados al Fondo de Reserva General.

Art. 40. — En ningún caso el Banco podrá tener divisas o cambio extranjero por más del 20 % de las reservas; ni computarlas dentro de las mismas por más del 10 %.

Art. 41. — El Banco estará obligado a cambiar a la vista sus billetes en cantidades no menores al valor en moneda nacional de una barra típica de oro de kilogramos 12,441 (400 onzas «troy»), por oro o, a opción del Banco, por divisas o cambio extranjero.

La tasa que regirá para el canje de billetes por cambio extranjero, o viceversa, no podrá variar en más del 2 % arriba o abajo de la par.

Relaciones con los bancos

Art. 42. — Los bancos nacionales o extranjeros que operen en el país con un capital no inferior a un millón de pesos moneda nacional, deberán mantener en todo momento en el Banco Central dos tercios del efectivo mínimo que determina la ley de bancos en relación a la magnitud de sus depósitos. Estos fondos formarán la base del sistema de la Cámara Compensadora que el Banco Central administrará en Buenos Aires, y en las otras plazas; pero en caso de que llegase a reducirse a menos del límite legal el efectivo de cualquier Banco, éste deberá reponer de inmediato la diferencia. El Banco Central queda facultado para convenir con el Banco de la Nación Argentina el depósito en las sucursales de éste del efectivo que deben depositar en el Banco Central los bancos del interior y del que deseen depositar las sucursales en el interior como parte integrante del efectivo que corresponda depositar en el Banco Central a los bancos a que pertenecen.

Relaciones con el gobierno

Art. 43. — El gobierno nacional encargará al Banco de todas sus remesas, cambios y transacciones bancarias, tanto en el interior del país como en el extranjero. Los

fondos del gobierno nacional serán depositados en el Banco Central. Los depósitos judiciales seguirán efectuándose en el Banco de la Nación Argentina. El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo, pudiendo excluir de sus disposiciones a las reparticiones autónomas y a los depósitos de garantía efectuados para intervenir en licitaciones públicas.

Art. 44. — El Banco podrá hacer adelantos, por tiempo limitado al gobierno nacional, para cubrir deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación hasta una cantidad que no exceda del 10 % del promedio de los recursos en efectivo que éste haya obtenido en los tres últimos años; todos los adelantos hechos por este concepto deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados; y si cualquier adelanto de esta naturaleza quedase impago después de aquel plazo no podrá volver a usarse la facultad del Banco para hacer ulteriores adelantos de esta clase en los años subsiguientes hasta que las cantidades adeudadas hayan sido pagadas. Sobre esos adelantos, el gobierno pagará un interés no mayor que el tipo mínimo del redescuento en vigor.

Art. 45. — El Ministerio de Hacienda de la Nación informará trimestralmente al Banco Central acerca del movimiento de la Tesorería, desenvolvimiento de la recaudación y los gastos, estado de la deuda y demás informaciones relativas a la situación financiera.

Art. 46. — El Banco abrirá una cuenta general para la Tesorería General de la Nación, a la cual acreditará todas las recaudaciones de cualquier clase que sean, y todos los adelantos hechos al gobierno, y sólo hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas subsidiarias por orden de la Tesorería y con intervención de la Contaduría General de la Nación.

Art. 47. — El Banco recibirá fondos del gobierno nacional y efectuará pagos por cuenta del mismo sin percibir remuneración por tales servicios. Conforme a lo dispuesto para todos los depósitos, el Banco no pagará ningún interés sobre las cantidades depositadas en las cuentas del gobierno.

Art. 48. — Las relaciones del Banco Central con el Poder Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacienda.

Art. 49. — En las localidades donde no tenga sucursal, el Banco Central podrá designar al Banco de la Nación Argentina en calidad de agente para el cobro y pago de fondos del gobierno nacional.

Art. 50. — La sede del Banco y la de sus sucursales, las operaciones que efectúe conforme al artículo 32 y los dividendos sobre sus acciones, estarán exentos de todo impuesto o contribución nacional, provincial o municipal.

Utilidades

Art. 51. — Al cierre de cada ejercicio, y después de deducidas las reservas que se juzgue necesario por deudas incobrables y de cobro dudoso, y efectuada la amortización del activo, se destinará el 20 % de las utilidades líquidas al fondo de reserva general hasta que éste alcance un monto equivalente al 25 % del capital subscrito. Una vez alcanzado este monto, se destinará al Fondo de Reserva General el 10 % de las utilidades líquidas hasta que éste se eleve a una cantidad equivalente al capital subscrito. Del resto, sujeta siempre a las disposiciones del artículo 39, se pagará a los accionistas un dividendo no mayor del 5 % anual sobre el capital en acciones. Del saldo res-

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

tante se tomará un 10 % para el Fondo de Reserva General del Banco y el resto se acreditará a la cuenta del gobierno nacional.

Cuentas y estados

Art. 52. — El ejercicio financiero del Banco durará un año. Dentro de los 20 días de su cierre, el Banco preparará y publicará su balance y cuenta de ganancias y pérdidas al día del cierre. La memoria anual del Banco será publicada por el directorio antes de la fecha de la asamblea anual.

Art. 53. — Inmediatamente después del día 15 y después del último día de cada mes, el Banco deberá preparar y publicar un estado de su activo y de su pasivo al cierre de los negocios en los días indicados. Este estado se ajustará a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Disposiciones generales

Art. 54. — Durante el término que fija el artículo 1º las relaciones que esta ley establece entre el Banco Central y los bancos, las disposiciones referentes a los préstamos directos o indirectos a los gobiernos y la composición del directorio y de las asambleas, no podrán ser modificadas sin la aprobación de los bancos accionistas dada en una asamblea extraordinaria convocada expresamente al efecto.

Art. 55. — Las funciones de síndico serán desempeñadas por uno de los siguientes funcionarios que el Poder Ejecutivo designará anualmente; miembros del Tribunal de Cuentas o procurador del Tesoro. La remuneración del síndico será fijada por la asamblea con las mismas restricciones establecidas en el último párrafo del artículo 10.

Art. 56. — La Inspección General de Justicia se limitará a intervenir en las asambleas con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones respectivas de la presente ley.

Disposiciones transitorias

Art. 57. — El primer vicepresidente del Banco cesará en su mandato después de cinco años de servicios. De los primeros directores, cuatro cesarán en su mandato después de un año, y cuatro después de dos años de servicios, determinándose el orden de su retiro por sorteo; y sin que se aplique, en las elecciones que deberán hacerse para llenar las vacantes, la restricción del artículo 13 relativa a la reelección de los directores elegidos por los bancos extranjeros.

Art. 58. — Hasta tanto no se disponga por ley especial, no entrarán en vigor las prescripciones del artículo 41.

Art. 59. — Los empleados y obreros sujetos al régimen de las leyes de jubilaciones y pensiones civiles o de otras leyes nacionales que se incorporen al Banco Central, podrán optar en el primer año de su funcionamiento, entre seguir bajo el régimen de aquellas leyes o acogerse a la de jubilaciones bancarias.

Art. 60. — En todo cuanto no esté previsto en esta ley regirán supletoriamente las disposiciones de la ley de bancos y del Código de Comercio.

Quedan derogadas las disposiciones de otras leyes, en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 61. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley de bancos

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Régimen de la ley de Bancos

Artículo 1º — Ninguna persona de existencia visible o ideal podrá desenvolver actividades en el territorio de la República que dependan principalmente de la aceptación de depósitos a la vista o a plazos, ni usar en su razón social, firma comercial o título, las palabras Banco, banquero o bancario, ni abrir sucursales con el mismo calificativo, sin previa autorización del Poder Ejecutivo, que sólo la concederá después de oír al Banco Central y verificar que se ha cumplido con las condiciones de la presente ley y las prescripciones pertinentes de la ley de creación del Banco Central.

La autorización del Poder Ejecutivo nacional no será necesaria en los casos de bancos oficiales de las provincias.

Proporción mínima entre los depósitos y el efectivo

Art. 2º — Los bancos nacionales o sucursales de bancos extranjeros establecidos en la Argentina, deberán mantener en todo momento en el país un efectivo que represente por lo menos el 16 % de sus depósitos a la vista y el 8 % de sus depósitos a plazo. Los bancos que tienen un capital no inferior a un millón de pesos moneda nacional tendrán que mantener los dos tercios por lo menos de dicho efectivo en depósitos a la vista en el Banco Central y el saldo hasta completar el efectivo mínimo fijado, deberá consistir en moneda, sea en billetes o metálico.

Art. 3º — El Banco Central podrá eximir transitoriamente a cualquier Banco y cuando mediaran razones circunstanciales, de la obligación de efectivo mínimo prescrita por el artículo anterior; pero mientras dure esta exención el Banco en cuestión no podrá repartir beneficios sin autorización del Banco Central; si dentro de los dos años no hubiera cumplido con las disposiciones del artículo 2º, o no hubiera podido presentar un plan que mereciera la aprobación del Banco Central, será liquidado de acuerdo con las disposiciones de esta ley y del Código de Comercio.

Operaciones prohibidas a los bancos

Art. 4º — Queda prohibido a los bancos:

a) Comprar o conservar en forma permanente la propiedad de bienes raíces que no fueren necesarios para el uso del Banco y sus sucursales. En cuanto a los inmuebles para el propio uso de un Banco, o las acciones u obligaciones de la entidad a que pertenecen los inmuebles en cuestión, deberá someterse a la aprobación del Banco Central un plan gradual de amortización del importe que excediese del 20 % del capital y el 50 % de las reservas del Banco. En lo concerniente a los inmuebles de propiedad de los bancos en la fecha de la ley que no se destinasen a su propio uso, también deberá someterse al Banco Central un plan gradual de liquidación o amortización de los mismos. Cualquier Banco que recibiese bienes raíces en pago de deudas o que los adquiriese en defensa de

créditos, tendrá que vender los mismos dentro del plazo de 4 años que el Banco Central podrá extender en casos excepcionales con la aprobación de las dos terceras partes de su directorio;

- b) Tener acciones dos años después de su adquisición, excepto lo dispuesto en el inciso anterior; y guardar en cartera, después del mismo plazo, obligaciones que representen más del 20 % del capital de cada una de las entidades que las emitieron y más del 10 % del capital y 25 % de las reservas del Banco; en cuanto a las acciones u obligaciones que en la fecha de esta ley estuvieran fuera de las disposiciones de este inciso, los bancos deberán someter a la aprobación del Banco Central un plan gradual de liquidación de las mismas. Cualquier Banco que recibiese acciones u obligaciones en pago o defensa de sus créditos tendrá para ajustarse a dichas disposiciones un plazo de 3 años que el Banco Central podrá extender en casos excepcionales con aprobación de las dos terceras partes de sus directorios;
- c) Participar directamente en cualquiera empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase. Las participaciones que los bancos tuviesen en la fecha de la ley o adquiriesen después en pago o defensa de sus créditos, deberán ser liquidadas en la misma forma y plazos que los inmuebles;
- d) Tomar a su cargo la administración de los bienes de sus deudores morosos por un plazo mayor de dos años, que el Banco Central podrá extender en casos excepcionales con la aprobación de las dos terceras partes de su directorio;
- e) Aceptar de otro Banco acciones del mismo a título de garantía.

Depósitos

Art. 5º — A los efectos de la presente ley, depósitos a la vista significa y comprende a todas las obligaciones pagaderas dentro de 30 días, o sujetas a un aviso previo a su pago menor de 30 días; el término depósito a plazos comprende a todas las obligaciones — con inclusión de los depósitos de ahorro sujetos a lo dispuesto en el artículo 8º —, pagaderas después de 30 días o sujetas a un aviso previo a su cargo no menor de 30 días.

Art. 6º — El interés que pagarán los bancos sobre depósitos a la vista será inferior por lo menos en 3 puntos al tipo de redescuentos mínimo del Banco Central; sobre depósitos de ahorro el interés será inferior por lo menos en 1 punto a dicho tipo de redescuento.

Art. 7º — El excedente de los depósitos de ahorro sobre la cantidad de \$ 20.000 m/n. por persona, no devengará interés alguno. En el caso de las sociedades cooperativas y asociaciones mutualistas podrá pagarse interés hasta \$ 50.000 moneda nacional.

Art. 8º — Los bancos no admitirán depósitos de ahorro con la obligación de restituirlos sin previo aviso mínimo de 30 días; pero podrán devolverlos en cualquier momento y cantidad, sin requerir preaviso; y en todo caso deberán hacerlo para cantidades mínimas y pequeños depósitos, según la reglamentación que deberá dictar el Banco Central.

Art. 9º — En caso de liquidación de un banco, los depósitos de ahorro hasta \$ 5.000 m/n. tendrán privilegio sobre la generalidad de sus bienes muebles después de las otras categorías de créditos privilegiados

que enumeran los códigos de Comercio y Civil y la ley de quiebras. El mismo privilegio tendrán los depósitos de las sociedades cooperativas y asociaciones mutualistas hasta \$ 10.000 moneda nacional.

Balances e informes

Art. 10. — Todo Banco deberá publicar dentro de los 60 días de la fecha de cierre de su ejercicio financiero, en los formularios prescriptos por el Banco Central y siempre con anticipación a la realización de su asamblea ordinaria anual:

- 1º Su balance general;
- 2º Su cuenta de ganancias y pérdidas.

El balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas llevará el visto bueno de un contador público nacional.

Art. 11. — Todo Banco establecido en el país deberá presentar mensualmente al Banco Central un estado confidencial sobre sus operaciones, en el formulario que aquél determinará; y tendrá la obligación de suministrar al Banco Central cualquier ulterior información aclaratoria o ampliatoria de los datos consignados en este formulario que el Banco Central le requiriese. Estos informes serán firmados por el gerente general y el contador general del Banco, o sus reemplazantes, demostrarán el estado a la fecha del cierre de las operaciones de cada mes y deberán llegar a poder del Banco Central dentro de los 21 días subsiguientes a esa fecha.

El Banco Central publicará mensualmente un resumen del estado de los bancos mostrando los totales de los diferentes rubros, sin poder divulgar los detalles individuales de cada establecimiento.

Inspección de bancos

Art. 12. — Los bancos tendrán la obligación de dar acceso a su contabilidad y a todos sus libros y documentos a los inspectores que periódicamente deberá mandar el Banco Central. En caso de comprobar violaciones a esta ley o a otras disposiciones legislativas, la inspección de bancos del Banco Central dará aviso al procurador fiscal, a fin de que éste gestione la imposición de las penas que correspondan.

Art. 13. — Las funciones de inspección, control y examen de los bancos, incluso el requerimiento de balances e informes, ejercitadas hasta el presente por la Inspección General de Justicia, serán del resorte exclusivo del Banco Central, a cuyo cargo queda la aplicación de esta ley.

Art. 14. — Las informaciones recogidas en los bancos por la inspección de bancos del Banco Central, tendrán carácter estrictamente confidencial y no serán comunicadas a los miembros del directorio del Banco con excepción del presidente, el que podrá informar al respecto al directorio cuando lo juzgase conveniente.

Art. 15. — La inspección de bancos del Banco Central se encargará de la liquidación de los bancos cuando éstos se encontrasen comprendidos dentro de las disposiciones pertinentes del Código de Comercio o de la presente ley. Por el desempeño de esta función, ni el Banco ni sus funcionarios cobrarán honorario alguno; pero el Banco podrá cobrar a la masa el importe de los gastos en que incurriera en el desempeño de la misma.

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

Operaciones hipotecarias.

Art. 16. — Los bancos que reciben depósitos y se dedican a la vez a operaciones hipotecarias, constituirán una sección especial para las mismas, asignándoles un capital determinado. Tales operaciones se financiarán exclusivamente con dicho capital, las reservas de la sección y el producto de la colocación de obligaciones y debentures.

Art. 17. — Las disposiciones de esta ley en materia de cuentas e inspección serán aplicables a las secciones hipotecarias referidas en el artículo anterior, pero no a los bancos hipotecarios que no reciban depósitos.

Disposiciones varias

Art. 18. — Los bancos nacionales o sucursales de bancos extranjeros establecidos en la Argentina, destinarán anualmente por lo menos el 10 % de sus utilidades líquidas para constituir un fondo de reserva, hasta que éste represente como mínimo el 50 % de su capital realizado y el capital y las reservas representen conjuntamente el 33 % de los depósitos de ahorro.

Art. 19. — Los bancos que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán pasibles de multas de \$ 500 m/n. a \$ 50.000; y las personas que hubieran cometido la infracción, si sus actos no tuvieran pena mayor en el Código Penal, serán reprimidas con las mismas multas, o prisión de seis meses a cinco años, o ambas penas a la vez según el monto y la naturaleza de las operaciones y la reincidencia en la infracción.

Art. 20. — En todo cuanto no esté establecido en esta ley, los bancos continuarán rigiéndose por las disposiciones del Código de Comercio.

Art. 21. — Deróganse las disposiciones de otras leyes, en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias**Ley de bancos****PROYECTO DE LEY**

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Creación y objeto

Artículo 1º — Créase el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias con sede en la Capital Federal, a fin de adquirir inmuebles, créditos y demás inversiones inmovilizadas o congeladas de los bancos y venderlos gradual y progresivamente, propendiendo a la radicación de familias de agricultores en tierras de valores ajustados a su rendimiento real, y a la transferencia de otras inversiones a manos que aseguren su mayor productividad.

Capital y fondo de reserva

Art 2º — El Instituto Movilizador funcionará con un capital de 10.000.000 de pesos moneda nacional, que será aportado por el gobierno nacional y un Fondo de Reserva, formados por los fondos resultantes a favor del gobierno de las transferencias contempladas en el artículo 4º de la ley de organización, y con la emisión de bonos amortizables de acuerdo con el artículo 4º de la presente ley.

Directorio

Art. 3º — El directorio del Instituto Movilizador estará integrado por un presidente designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y tres vocales designados por el directorio del Banco Central, y confirmados por el Poder Ejecutivo, entre personas de reconocida experiencia comercial, industrial o agropecuaria. Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos.

El quórum para el funcionamiento del directorio será de tres miembros.

No podrán ser miembros del directorio los funcionarios y empleados nacionales, provinciales o municipales, los insolventes, los deudores morosos y los que hubieran sido condenados por delitos comunes.

Compra y liquidación de activos congelados

Art. 4º — El Instituto Movilizador podrá pagar el activo que adquiriese de cada Banco, por un valor que no excederá al de inventario, parte en efectivo y parte en bonos nominales amortizables que a ese efecto queda facultado a otorgar con la autorización del Poder Ejecutivo. Estos bonos no podrán ser redescontados. El reembolso total de los bonos a los bancos queda sujeto a la liquidación definitiva de los activos comprados.

Los bancos deberán asegurar al Instituto Movilizador el reintegro total de las sumas que hubieran recibido de éste en pago de los activos transferidos.

Al transferirse los activos congelados al Instituto Movilizador, deberá extenderse a los deudores, en cuanto al plazo y el interés, facilidades correlativas a las que hubiesen obtenido los bancos.

Art. 5º — Dentro del primer año de funcionamiento, el directorio establecerá el plan detallado de liquidación, siguiendo los lineamientos del plan general aprobado por la comisión organizadora, y fijando las normas y el plazo, de acuerdo con los cuales deberá ejecutarse, sujeto a las siguientes modalidades:

- Los inmuebles deberán venderse en pública subasta; los impuestos nacionales atrasados que se adeudaren sobre los mismos quedarán en suspenso hasta que se realice la venta;
- En materia de créditos deberá agotarse todos los recursos legales para asegurar su cobranza, sin perjuicio de aceptar por decisión expresa del directorio, convenios o arreglos extrajudiciales que permitan una más pronta o mejor percepción del crédito; sujeto, todo ello, a la reglamentación especial que dictará el Poder Ejecutivo;
- No se reconocerá comisiones a cargo del instituto a los intermediarios utilizados en la venta de muebles, inmuebles y semovientes, salvo resolución expresa del directorio.

Administración y reparto del producido

Art. 6º — Para la administración y liquidación de los activos adquiridos, y salvo casos especiales en que podrá valerse de firmas competentes, el instituto utilizará a los bancos existentes, ya sea a los originarios de dicho activo, o a otras, pagando la comisión a convenirse según la índole del mismo y en relación al producido anual.

Art. 7º — El producto anual de la liquidación y los intereses y demás recursos producidos por los créditos y valores transferidos por cada uno de los bancos al

Instituto Movilizador y percibidos por éste, será aplicado por el mismo en la forma que determine el Directorio, al reintegro de los fondos en efectivo transferidos por el Instituto al Banco en cuestión, y al pago de los intereses y amortización de los bonos que hayan sido entregados a cada Banco en pago de aquellos mismos créditos y valores. Previamente serán deducidos en forma proporcional los fondos requeridos por el artículo 8º de esta ley.

Presupuesto, cuentas e inspección

Art. 8º — El Instituto Movilizador se dará su presupuesto en la forma prescrita por el artículo 10º de la ley 11.672.

Art. 9º — La Contaduría General de la Nación designará un contador delegado en el Instituto Movilizador, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de contabilidad y sus decretos reglamentarios. En todo lo que no se oponga expresamente a esta ley, el Instituto Movilizador se ceñirá a las disposiciones de la ley de contabilidad, pudiendo, sin embargo, apartarse de la misma en casos excepcionales y siempre con la autorización del Poder Ejecutivo.

Art. 10. — Las funciones de examen, inspección y control que determina la ley de bancos, se extenderán a las operaciones del Instituto Movilizador.

Relaciones con el Banco Hipotecario Nacional

Art. 11. — Facúltase al Banco Hipotecario Nacional a concertar préstamos con el Instituto Movilizador, sobre los inmuebles adquiridos, a fin de facilitar su venta a terceros; o a convenir previamente con éste la realización de dichos préstamos después de vendidos los inmuebles a terceros.

Art. 12. — En el caso de propiedades susceptibles de ser colonizadas, el Instituto Movilizador, previo asesoramiento del Ministerio de Agricultura, podrá concertar con el Banco Hipotecario Nacional préstamos de colonización.

Art. 13. — El Instituto Movilizador queda facultado para recibir de terceros cédulas del Banco Hipotecario Nacional en pago de créditos o de adquisición de inmuebles, o a recibir de los adquirentes dichas cédulas en garantía del pago de los inmuebles comprados.

Art. 14. — El Instituto Movilizador deberá convenir con el Ministerio de Hacienda y el Banco Hipotecario Nacional, antes de realizar las operaciones referidas en los artículos 11, 12 y 13, los plazos y la forma en que podrá vender en el mercado las cédulas recibidas del Banco Hipotecario Nacional o de terceros, en pago de créditos o de adquisiciones de inmuebles.

Disposiciones varias

Art. 15. — El Instituto Movilizador formulará anualmente una lista de los escribanos públicos que deberán intervenir y registrar los contratos de compra y venta, convenios y transacciones que deban pasarse en escritura pública. El Instituto Movilizador establecerá su propio arancel para tales operaciones.

Art. 16. — Los procuradores generales de la Nación y del tesoro, así como los asesores en materia legal o técnica de las dependencias del Estado, sean éstas autónomas o no, dictaminarán o asesorarán por escrito a solicitud directa del Instituto Movilizador.

El Instituto Movilizador utilizará los servicios de los técnicos y tasadores del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, salvo casos excepcionales en que juzgue conveniente utilizar a

otros especialistas, cuyos servicios se sujetarán a un arancel o remuneración previamente establecidos.

Art. 17. — Las relaciones del Instituto Movilizador con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del Ministerio de Hacienda al cual se le elevarán los balances mensuales, memorias y balances anuales y todas las informaciones que éste le solicite.

Art. 18. — Dentro de los ocho años de funcionamiento del Instituto Movilizador, y a requerimiento del Banco Central, el Poder Ejecutivo deberá dar por terminadas las funciones del Instituto, y confiará su liquidación y el cumplimiento de los convenios existentes a una comisión liquidadora o a la Oficina de Inspección de Bancos del Banco Central. Cumplida esta disposición, el Poder Ejecutivo propondrá al Honorable Congreso el destino ulterior de los bienes del Instituto Movilizador.

Art. 19. — Deróganse las disposiciones de otras leyes en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Modificaciones a la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase el artículo 4º de la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina (Nº 4.507) aumentándose dos vocales en el directorio del mismo, el que quedará constituido con ocho directores.

Art. 2º — Cuatro vocales serán nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, dándose representación a las diversas regiones del país. Los cuatro restantes los elegirá éste dentro del total de candidatos propuestos por las entidades referidas en el artículo siguiente. En ambos casos se requerirá acuerdo del Senado.

Art. 3º — En cada renovación de directorio del Banco de la Nación Argentina, propondrán al Poder Ejecutivo cuatro candidatos a vocales cada una de las siguientes entidades o agrupaciones de entidades: Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Unión Industrial Argentina; Sociedad Rural Argentina y las otras sociedades rurales; Bolsa de Comercio de Rosario y las otras bolsas de comercio. Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir entre las entidades que proponen candidatos a otra entidad o agrupación de entidades que sean representativas de agricultores o de cooperativas agrícolas, en cuyo caso cada entidad, o agrupación de entidades elegirá tres candidatos.

Art. 4º — Modifícase el artículo 5º de la ley 4.507, aumentándose en tres mil pesos moneda nacional mensuales, la suma fijada para ser distribuida entre los vocales del directorio, en proporción a su asistencia.

Art. 5º — Para la elección de los cuatro vocales del directorio referidos en el artículo 2º de esta ley, deberán tenerse en cuenta las disposiciones que rigen en el artículo 8º de la ley 4.507, en todo cuanto no se oponga expresamente la presente.

Art. 6º — Modifícase el artículo 12 de la ley 4.507, el que quedará redactado en la siguiente forma: «El directorio no podrá conceder préstamos a la Nación, por un monto superior al 15 % del capital y las reservas del Banco, ni prestar a las provincias y municipalidades, directa o indirectamente, ya sea en forma de descuentos, adelantos, créditos en descubierto, compra de letras, títulos u otros valores, o adelantos concedidos a terceros con garantía de tales letras, títulos o valores, o en cualquier otra forma. Las disposiciones del presente artículo regirán a partir de la constitución del

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

Banco Central y no afectarán las operaciones anteriores a la sanción de esta ley.»

«El Banco podrá, sin embargo, conceder adelantos con caución de títulos nacionales, provinciales o municipales que se coticen en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y cédulas nacionales, siempre que no se trate de operaciones destinadas en una forma u otra a financiar la colocación originaria de dichos valores nacionales para suministrar fondos al gobierno nacional directa o indirectamente; y por un monto que no podrá exceder del 20 % del capital y las reservas del Banco.»

Art. 7º — El Banco no podrá sino con dos tercios de votos de su directorio, prestar más de \$ 500.000 a una sola firma o hacer a una sociedad anónima préstamos mayores a la mitad de su capital.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley de bancos

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Modificaciones a la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional

Artículo 1º — Modifícase el artículo 8º de la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional, número 8.172 en la siguiente forma:

«De los ocho directores, cuatro serán nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, dándose representación a las diversas regiones del país. Los cuatro restantes los elegirá éste dentro del total de candidatos propuestos por las entidades referidas en el artículo siguiente. En ambos casos se requerirá acuerdo del Senado.»

Art. 2º — En cada renovación del directorio del Banco Hipotecario Nacional propondrán al Poder Ejecutivo cuatro candidatos a vocales cada una de las siguientes entidades o agrupaciones de entidades: Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Sociedad Rural Argentina y las otras sociedades rurales; Bolsa de Comercio de Rosario y las otras bolsas de comercio; y Corporación de Tenedores de Títulos y Acciones y otras entidades gremiales que determinará el Poder Ejecutivo. Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir entre las entidades que proponen candidatos a las que sean representativas de agricultores o de cooperativas agrícolas, en cuyo caso cada entidad o agrupación de entidades elegirá tres candidatos.

Art. 3º — Para la elección de los cuatro vocales del directorio referido en el artículo 1º, deberán tenerse en cuenta las disposiciones que rigen en el artículo 8º de la ley 8.172, en todo cuanto no se oponga expresamente la presente.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ley de bancos

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Ley de organización

Comisión organizadora

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para nombrar una comisión organizadora, presidida por el ministro de Hacienda e integrada por cuatro vocales, que tendrá a su cargo proveer todo lo relativo a la or-

ganización del Banco Central de la República Argentina (ley número ...) y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley número ...) y proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos, estatutos y decretos reglamentarios que proyecte para el mejor cumplimiento de las leyes citadas y la Ley de Bancos (ley número ...).

Constitución del Banco Central

Art. 2º — El Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado nombrará el primer presidente y vicepresidente del Banco Central, sin necesidad de las ternas prescriptas por el artículo 10 de la ley de creación del Banco Central.

Art. 3º — La comisión organizadora determinará la forma de subscripción de las acciones del Banco Central, y los plazos en que los bancos deberán integrar dichas acciones y depositar en el Banco Central los efectivos correspondientes a sus depósitos, de acuerdo con las prescripciones legales.

Art. 4º — Autorízase al Poder Ejecutivo para que en el momento que lo juzgue oportuno y después de haber oído a la comisión organizadora, proceda a:

- Suprimir la Comisión de Redescuento, la Junta Autónoma de Amortización y la Caja de Conversión;
- Transferir al Banco Central los rubros activos y pasivos de la Caja de Conversión, junto con los depósitos oficiales del Banco de la Nación Argentina — salvo los de las reparticiones autónomas que resuelva exceptuar, lo mismo que los depósitos de garantía en las licitaciones públicas — el Fondo de Beneficios de Cambios y el Fondo de Divisas Extranjeras. Dichas transferencias se efectuarán de acuerdo con las condiciones y equivalencias que determinará el Poder Ejecutivo. Para el oro de la Caja de Conversión la equivalencia no podrá exceder de 43.000 pesos moneda nacional por el contenido en oro fino de una barra típica de kilogramos 12,441 (400 onzas «troy»);
- Deducir de la emisión actual, antes de realizar las transferencias mencionadas, la moneda subsidiaria de denominaciones de cinco pesos e inferiores (incluso las monedas de níquel y cobre), de la que se hará cargo el gobierno nacional así como de la acuñación o emisión futura de esta moneda subsidiaria.

Todo el oro existente en la Caja de Conversión en el momento de dictarse esta ley deberá transferirse al Banco Central, sin que el gobierno pueda tomar parte alguna de él, ni el Banco pueda usarlo con otros fines que los expresados en la ley de su creación. Hasta tanto se transfirieran sus rubros activos y pasivos al Banco Central, la Caja de Conversión sólo podrá emitir billetes de acuerdo con las leyes existentes. Una vez efectuada esa transferencia, el Banco Central no podrá aumentar la emisión en otra forma que no sean las operaciones autorizadas por la ley de su creación.

Al realizarse la transferencia, el saldo del crédito de la Caja de Conversión contra el gobierno nacional por las emisiones anteriores a la ley 3.871, después de deducir el importe de los billetes subsidiarios, quedará representado en el Banco Central por un bono sin interés otorgado por el tesoro nacional.

Las obligaciones estipuladas en pesos oro sellado, que hasta hoy pueden pagarse a 2,27 papel por peso oro, continuarán pagándose en igual forma.

Canje de las emisiones actuales

Art. 5º — Los billetes de la emisión actual de la Caja de Conversión transferidos al Banco Central que no le fuesen presentados para su canje dentro de los dos años contados desde la fecha en que el Banco haya comenzado la emisión de los nuevos billetes, dejarán de tener curso legal pero podrán ser canjeados en el Banco durante los tres años siguientes.

Al expirar dicho plazo, el saldo que no se haya presentado para el canje será transferido al Fondo de Reserva del Instituto Movilizador, previa deducción del costo del reemplazo de toda la emisión actual de billetes. Sin embargo, los billetes que se presentaran al Banco Central después de vencido el plazo mencionado y dentro de un nuevo término de diez años, serán canjeados por billetes de dicho Banco por cuenta del gobierno.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo dentro del plazo de dos años, a partir de la iniciación de las operaciones del Banco Central, y por intermedio de éste, conforme al artículo 36 de la ley de creación (ley número ...), reemplazará por nuevos billetes de curso legal los billetes subsidiarios de denominaciones de cinco pesos e inferiores.

El saldo de billetes que no se hubiera presentado al canje tres años después de expirado el plazo de dos años establecido en el párrafo anterior, será destinado al mismo fin previsto por la segunda parte del artículo precedente.

Transcurridos dichos plazos todos los billetes actuales de denominaciones de cinco pesos e inferiores, dejarán de tener curso legal, pero serán canjeados por moneda subsidiaria a su presentación al Banco Central, dentro de un nuevo término de diez años.

Transformación de la deuda flotante

Art. 7º — Facúltase al Poder Ejecutivo a transformar en bonos consolidados del tesoro nacional de 3 % de interés y $\frac{1}{4}$ % de amortización acumulativa hasta un total de 400.000.000 de pesos moneda nacional, el saldo del crédito contra caución de títulos del empréstito patriótico y letras de tesorería actualmente en circulación. Esta medida será tomada después de haber oído al respecto a la comisión organizadora. Los bonos provenientes de la transformación de las letras serán comprados a la par por el Banco Central con destino a las operaciones que prevé el artículo 32, inciso 1) de su ley de creación (ley número ...).

Art. 8º — El fondo de conversión a que se refiere el artículo 3º de la ley número 3.871 deberá ser cancelado, destinándose su activo a compensar deuda flotante del gobierno nacional.

Art. 9º — Facúltase al Poder Ejecutivo a convenir con el Banco de la Nación Argentina el arreglo definitivo del remanente de la deuda directa e indirecta del gobierno nacional con el mismo, después de haberse cumplido con las disposiciones de esta ley relativas a la deuda flotante, emitiendo al efecto los valores nacionales que fuese necesario.

Constitución del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias

Art. 10. — Antes de la designación del presidente y los vocales del Instituto Movilizador, el Poder Ejecutivo deberá aprobar las normas generales para el funcionamiento del mismo, trazadas por la comisión organizadora.

Art. 11. — El Instituto Movilizador procederá de inmediato a examinar los valores congelados que los bancos le ofrezcan y que sean susceptibles de ser adquiridos por aquél, y en particular su relación con el pasivo de redescuentos, a fin de proponer a la comisión organizadora las condiciones de compra de dichos valores por el Instituto, y el plan general de liquidación de los mismos.

Art. 12. — Después de cumplidas las disposiciones del artículo anterior y una vez apartados los fondos requeridos por el gobierno nacional a los fines del cumplimiento del artículo 5º de la ley de creación del Banco Central (ley número ...) y del artículo 2º de la ley de creación del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley número ...) la Comisión Organizadora determinará ad referendum del Poder Ejecutivo, el monto definitivo del fondo de reserva del Instituto Movilizador el que podrá invertirse, lo mismo que el capital, en valores nacionales o en bonos consolidados del tesoro nacional.

Art. 13. — La diferencia entre el monto inicial de la reserva constituida conforme al artículo 2º de la ley de creación del Instituto Movilizador, y el monto definitivo según el artículo anterior, será transferida al gobierno nacional, el que la destinará íntegramente a la cancelación de su actual deuda bancaria.

Transferencia de las operaciones de cambio al Banco Central

Art. 14. — La Comisión Organizadora aconsejará al Poder Ejecutivo la forma y oportunidad en que deberá transferir el manejo de las operaciones de cambio al Banco Central, de acuerdo con el mismo, el que se ajustará, mientras no se restablezca la libertad del mercado de cambios, a las normas establecidas por aquél.

Art. 15. — En el Fondo de Beneficios de Cambio transferido al Banco Central de acuerdo con el artículo 4º de la presente ley, se acreditarán las diferencias entre el tipo de compra y el de venta de las divisas provenientes de las exportaciones, las que aún cuando el Poder Ejecutivo autorizara su venta en el mercado libre sólo podrán ser negociadas por los bancos o firmas autorizadas, así como las divisas provenientes de toda otra operación de cambios; y se debitarán:

- a) Las diferencias de cambio en los servicios de la deuda pública y demás remesas al exterior del gobierno nacional; y los gastos de la Oficina de Control de Cambios, según presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo;
- b) Las diferencias en contra que pudieran resultar entre el valor de compra y el de venta de los granos adquiridos por la Junta Reguladora de Granos; y los gastos de la misma aprobados por el Poder Ejecutivo. Si la diferencia fuera a favor se acreditará a dicho fondo;
- c) Las diferencias de precio que el Poder Ejecutivo mediante organizaciones de emergencia que reputase conveniente, resolviese asignar directa o indirectamente a los productores agropecuarios, según el margen obtenido en la venta de divisas o cambio extranjero provenientes de la exportación del producto o grupo de productos a que se refieren dichas diferencias de precios; y los gastos de tales organizaciones aprobados por el Poder Ejecutivo.

Art. 16. — Los fondos no utilizados en la forma prevista en el artículo anterior podrán ser incorpora-

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

dos al Fondo de Divisas a que se refiere el artículo 43 de la ley de presupuesto vigente, hasta que el Honorable Congreso decida su aplicación definitiva. También ingresará al mismo fondo el recargo de hasta 20 % (incluida, a los fines del cómputo, la diferencia que exista entre el tipo oficial y el del mercado libre) sobre el importe de las monedas extranjeras correspondientes al valor de las importaciones sin permiso previo, que deberá pagarse en divisas o cambio extranjero en los Bancos autorizados antes del despacho a plaza de las mercaderías, conforme lo reglamente el Poder Ejecutivo y mientras se mantenga el sistema de los permisos previos del cambio.

Art. 17. — El Poder Ejecutivo determinará los requisitos necesarios, incluso la declaración jurada, para establecer la índole de todas las operaciones de cambio; podrá requerir de los negociantes de cambio o los que intervengan como compradores, vendedores, intermediarios o en cualquiera otra forma en las operaciones de cambio, las informaciones sobre las mismas que juzgue conveniente, e inspeccionar todos los libros y documentos pertinentes.

Las multas a aplicarse en casos de infracciones o falsas declaraciones, de conformidad con la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, no podrán exceder del décuplo de la operación realizada.

Comisión de Divisas

Art. 18. — Créase con carácter transitorio la Comisión de Divisas bajo la presidencia del ministro de Hacienda o en su ausencia del subsecretario de Hacienda, compuesta de un representante ad honorem designado por cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Banco Central o Comisión Organizadora mientras aquel no se encuentre constituido, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Unión Industrial Argentina y Centro de Importadores. El director de la Oficina de Control de Cambios tendrá acceso a la comisión con voz pero sin voto.

Art. 19. — Son funciones de la Comisión de Divisas:

- Proponer al Ministerio de Hacienda las normas para el otorgamiento y aplicación de los permisos previos de cambio por la Oficina de Control de Cambios; y verificar el cumplimiento de las normas aprobadas por el mencionado ministerio;
- Entender en las reclamaciones presentadas por los importadores a la Oficina de Control de Cambios y aconsejar lo que juzgase conveniente al Ministerio de Hacienda;
- Designar subcomisiones asesoras cuando lo juzgue conveniente.

Disposiciones varias

Art. 20. — La Comisión Organizadora someterá su presupuesto a la aprobación del Poder Ejecutivo. Los recursos necesarios se anticiparán de rentas generales, con cargo de devolución por el Banco Central y el Instituto Movilizador cuando éstos se constituyan.

Art. 21. — El procurador general de la Nación, lo mismo que los asesores en materia legal o técnica de los poderes públicos, dictaminarán a solicitud de la Comisión Organizadora.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo dará cuenta al Con-

greso dentro del próximo período ordinario de sesiones, de la forma en que ha dado cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Art. 23. — Autorízase al Poder Ejecutivo al promulgar la presente ley a señalar en cada caso el número de las leyes citadas.

Art. 24. — Deróganse las disposiciones de otras leyes en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

—Se votan los artículos modificados por la Cámara de Diputados y se aprueban, quedando estos proyectos convertidos en ley.

13

SENADURIA VACANTE POR MENDOZA. — MOCION

Sr. Sánchez Sorondo. — Pido la palabra.

En la sesión de hoy ha tenido entrada una nota del ex senador Cruz Vera, comunicando que por haber asumido el cargo de vicegobernador de la provincia de Mendoza, ha cesado su mandato de senador. Hago moción para que el Senado autorice a la Presidencia a comunicar esa vacante al gobierno de Mendoza.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Habiendo asentimiento, así se hará.

Se va a considerar el proyecto venido en revisión sobre petróleo.

14

REGIMEN LEGAL DEL PETROLEO

—Se lee:

Buenos Aires, 27 de Febrero de 1935.

Al señor presidente del Honorable Senado.

La Honorable Cámara que tengo el honor de presidir, ha considerado en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en segunda revisión de esa Honorable Cámara, sobre modificaciones al Código de Minería en lo relativo al régimen de las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos; y ha tenido a bien no insistir con respecto al artículo 394 (nuevo) e insistir en el artículo 403 de su sanción anterior.

Dios guarde al señor presidente.

ANTENOR R. FERREIRA.
Carlos González Bonorino.

Sanción del Senado

Los productos que se extraigan de la concesión de ser la manifestación del descubrimiento, pagarán una regalía del veinticinco por ciento.

Marzo 21 de 1935

CAMARA DE SENADORES

79ª Reunión. 16ª Sesión extraordinaria

der. Ejecutivo nacional con motivo de las que yo pronuncié en el Senado en la última exposición que hice sobre este mismo asunto, sobre el artículo 404. Hace dos años, señor presidente, con el objeto de exponer los fundamentos que justificaban una legislación para el caso de introducción de petróleo de países extranjeros denuncié que había sido dado el caso en Salta de traer petróleo de unas minas que la Standard Oil tiene al otro lado del Pilcomayo, en territorio boliviano, para ser introducidos por cañerías a la provincia de Salta.

Tuve que ratificarme en esa afirmación en la última exposición. Presenté e hice publicar en el Diario de Sesiones los manifiestos de importación otorgados por la Aduana nacional, en los cuales consta que se pagaba el impuesto correspondiente a la introducción de petróleo «por cañerías» de Bolivia a Salta; así dicen esos documentos, por cañerías.

Dije terminantemente que después de esa fecha de 1926 que tienen esos documentos aduaneros, no había podido encontrar otros comprobantes que acreditaran el petróleo en esas condiciones; es decir, por cañerías. Agregué, por vía de comentario, que parecía inverosímil que se hubiese atravesado el Bermejo con un oleducto, solo para usarlo dos días con setecientas toneladas, y algún diario de Salta denunciaba que ese tráfico se mantenía hasta el presente.

De manera que la denuncia de estos hechos tuvo exclusivamente propósitos legislativos, ocasionando la sanción del artículo 404 de esta ley y no hizo cargo contra gobiernos ni personas.

Por consiguiente si se considera conveniente una investigación por el gobierno de Salta o el Ejecutivo nacional, sobre la existencia y forma en que funcionan los oleoductos de Salta, que sea por motivos de interés público y de la sanción de esta ley, pero no en base a acusaciones o cargos que no he formulado contra los gobiernos, por hechos ocurridos muchos años atrás y que no debía formular como miembro informante de la Comisión de Códigos del Senado.

Nada más.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Se va a votar si el Senado insiste en su sanción anterior.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Queda convertido en ley.

15

COMUNICACION DE LAS SANCIONES. — MOCION

Sr. Santamarina. — Pido la palabra.

Hago indicación para que se comunique al Poder Ejecutivo las sanciones de esta Cámara en el día de hoy.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Habiendo asentimiento, así se hará.

16

VETO DEL PODER EJECUTIVO AL ARTICULO 5º DE LA LEY 12.140

Sr. Campos. — Pido la palabra.

Corresponde considerar la sanción venida de la Cámara de Diputados, que contiene el veto del Poder Ejecutivo a la ley 12.140, reformando la número 10.998, sobre construcciones y servicios sanitarios. Esta sanción de la otra Cámara importa la aceptación parcial de ese veto, que tiene el propósito de evitar que se dé efecto retroactivo a la ley.

Sr. Presidente (Bruchmann). — Se va a considerar.

—Se lee:

Buenos Aires, 26 de Febrero de 1934.

Al señor presidente del Honorable Senado.

La Honorable Cámara que tengo el honor de presidir, ha considerado en sesión de la fecha, la observación formulada por el Poder Ejecutivo a la última parte del artículo 5º de la ley número 12.140; y ha tenido a bien confirmar su sanción anterior, con exclusión de la parte objetada del artículo 5º, que dice: «y a los demás contribuyentes le acreditará a cuenta de las cuotas futuras, lo que corresponde por pagos anteriores».

Dios guarde al señor presidente.

A. R. FERREIRA.
Carlos G. Honorio.

Sr. Presidente (Bruchmann). — De acuerdo a la disposición constitucional, se va a votar nominalmente, por «sí» o por «no».

Sr. Arancibia Rodríguez. — La votación por «sí» implica la aceptación del veto, tal como lo ha hecho la Cámara de Diputados.

Sr. Campos. — La votación por «sí» significa que el Senado acepta la sanción de la ley con la supresión de la frase que fué motivo del veto por parte del Poder Ejecutivo.